**Respuestas de Costa Rica al Cuestionario del Relator Especial sobre los derechos al agua potable y el saneamiento**

# Diferentes niveles y tipos de servicios (2015) [(A/70/203)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/203)

Existen diferentes tipos de servicios de agua, saneamiento e higiene, que van desde la conexión a una red de tuberías e instalaciones compartidas, hasta soluciones individuales in situ. Estos tipos, junto con los diferentes modelos de gestión - servicios públicos, proveedores a pequeña escala, autoabastecimiento - dan lugar a varias combinaciones. Cada combinación debe evaluarse en su contexto, donde se determine cómo y en qué medida cumple con los derechos humanos al agua y el saneamiento. La realización de los derechos humanos al agua y el saneamiento se ve influida por la forma en que se prestan esos diferentes tipos de servicios y por la medida en que el Estado supervisa el servicio prestado. Este debate no puede aislarse de los contextos en que se aplican los tipos de servicios y las opciones de gestión. Todas las medidas destinadas a garantizar el acceso al agua, el saneamiento y las prácticas de higiene apropiadas se aplican en diversos contextos, que influyen en gran medida en la forma en que se pueden realizar los derechos humanos, incluidos los contextos geofísicos, políticos y económicos, y las preferencias socioculturales.

Pregunta(s):

1. Durante el último decenio (2010-2020), ¿de qué manera se ha utilizado el marco de derechos humanos relativo al agua\*, el saneamiento y la higiene para determinar y evaluar los tipos de servicios\*\* y los modelos de gestión\*\*\* adecuados teniendo en cuenta los contextos específicos?

\* Los estándares (suficiencia, salubridad y aceptabilidad, asequibilidad y accesibilidad) y los principios de derechos humanos (no discriminación e igualdad sustantiva, participación, acceso a la información, rendición de cuentas, sostenibilidad)

\*\*Tipo de servicios: conexión a una red de tuberías; instalaciones compartidas o comunales; y soluciones individuales in situ.

\*\*\* Categorías de modelos de gestión: servicios públicos (entidades formales de gran escala); proveedores de servicios a pequeña escala, de ONG o comunitarios, reconocidos o encargados por el Estado; proveedores de servicios a pequeña escala, de ONG o comunitarios no regulados por el Estado; y autoabastecimiento.

R/ El acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento deviene de la aplicación de los artículos 21 y 50 de la Constitución Política de Costa Rica, los cuales, en resumen, establecen que todos los habitantes de la república tiene derecho a la vida y a un ambiente ecológicamente equilibrado, siendo la interpretación de ambas normas y su vinculación con los servicios básicos de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento, desarrolla en múltiples sentencias emitidas por la Sala Constitucional, entre ellas; **Resolución Nº2018003479**, **Resolución Nº2019012231**, y **Resolución Nº2020003478**, entre otras.

Además, en Costa Rica el acceso a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento, se garantizan a través de la observancia del artículo 11 del “PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES”, conocido como *"PROTOCOLO DE SAN SALVADOR",* aprobado el 17 de noviembre de 1988, por Los Estados parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", artículo 14 de “LA CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE

DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER”, aprobada el 18 de diciembre de 1979, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, artículos 6 y 24 de “LA CONVENCIÓN

SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO”, adoptada el 20 de noviembre de 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y Principio 2 del “INFORME DE LA

CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA POBLACIÓN Y EL DESARROLLO” – El Cairo, 5 a 13 de septiembre de 1994.

Como norma de rango inferior a la Constitución Política, y Tratados Internacionales adherido por El Estado, el ordenamiento jurídico costarricense promulgó, a lo que interesa:

* Ley General de Agua Potable N°1634, y su reforma Ley N°7593, la cual declara de utilidad pública el planeamiento, proyección y ejecución de las obras de abastecimiento de agua potable en las poblaciones de la República.
* Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados N°2726 y su reforma N°5915 (en adelante AyA por sus siglas de Ley), con el objeto de dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos, lo mismo que el aspecto normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio nacional.
* Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos N°7593 y sus reformas (en adelante ARESEP por sus siglas de Ley), con el objetivo de armonizar los intereses y equilibrio entre las necesidades de los usuarios y los intereses de los prestadores de los servicios públicos, asegurar que los servicios públicos se brinden bajo un modelo de gestión de servicio público al costo e impacto ambiental equilibrado, velando porque se cumplan los requisitos de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarios para prestar en forma óptima, ejercer la regulación de los servicios públicos definidos en la propia Ley N°7593, fijando los precios y tarifas que refieren entre otros, al suministro del servicio de acueducto y alcantarillado, incluso el agua potable, la recolección, el tratamiento y la evacuación de las aguas negras, las aguas residuales y pluviales, así como la instalación, la operación y el mantenimiento del servicio de hidrantes.

Los artículos 5 inciso j) y 11 inciso i) de la Ley N°2726, facultan a AyA, a dictar sus propios Reglamentos autónomos, entre ellos; el Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, publicado en el Alcance N°285 de La Gaceta N°242 del 19 de diciembre de 2019, el cual a través de su artículo 7, obliga a dotar al usuario dotar al usuario de un servicio óptimo en cuanto a calidad, cantidad, continuidad, confiabilidad, igualdad, acceso universal, eficiencia, oportunidad, sostenibilidad y con un enfoque de derecho humano, salvo en casos de fuerza mayor, caso fortuito o periodos de mantenimiento debidamente divulgados que afecten determinada zona, a lo cual cabe abonar, que los artículos 9 y 10, establecen que, el servicio de agua potable se brindará bajo el principio de que el consumo humano es prioritario, y el servicio de alcantarillado sanitario y saneamiento, se brindará bajo el principio de protección a la salud pública en general

Por su parte, el artículo 25 de la Ley N°7593, faculta a la ARESEP, para regular de forma general a todos los operados de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento por medio del Reglamento Técnico: Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes AR-PSAYA-2013, emitido por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y publicado en el Alcance N°150 de La Gaceta N°186 del 29 de setiembre de 2014, y su Reforma AR-PSAYA-2015, publicada en el Alcance N°55 de La Gaceta N°69, del 12 de abril de 2016, el cual establece en su artículo 25, que los servicios de acueducto, alcantarillado sanitario e hidrantes serán brindados considerando la eficiencia y la eficacia en la gestión y el uso de los recursos, la universalidad, continuidad y regularidad del servicio; el uso de tecnologías limpias y eficientes; así como la protección a la salud humana y de los recursos hídricos.

En cuanto al acceso a la información que refiere a la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento, debemos destacar que el mismo se consagra en favor de todos los ciudadanos de Costa Rica, por medio de los artículos 27, 30 de la Constitución Política, sea, ejerciendo el derecho como persona física o jurídica, de forma individual o colectiva.

De forma más concreta, los artículos 60 del Reglamento para la prestación de los servicios de AyA y 118 del Reglamento Técnico AR-PSAYA-2013 y su Reforma ARPSAYA-2015, establecen como derecho de información gratuito de los usuarios; a) el ser atendidos oportunamente y recibir respuestas de sus gestiones en los plazos establecidos por Le., b) recibir toda la información específica y razonable de su factura y con la debida antelación a su vencimiento, en el tiempo establecido y por el medio o lugar señalado., c) solicitar modificaciones y consultas sobre los servicios, certificaciones, constancias, estados de cuentas, historiales de pago., d) recibir comunicación oportuna, sobre suspensiones de servicio y en caso necesario, sobre abastecimiento alterno de agua potable., e) conocer las condiciones de prestación, el PMYES, los precios y tarifas de los servicios., f) conocer las propuestas y estudios de modificación de precios y tarifas.

Entre tanto, los artículos 16, 17 y 18 del Reglamento Técnico AR-PSAYA-2013 y su Reforma AR-PSAYA-2015, imponen a los prestadores públicos del servicio de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento, la obligación para proveer a la Autoridad Reguladora información completa, fidedigna, actualizada, precisa, suficiente y clara sobre los servicios, por medio de sistemas de información almacenada en bases de datos con formato electrónico que deberán contener como mínimo; registros actualizados de los niveles de servicio, copias de los análisis de laboratorio sobre calidad del agua brindada, mapas que muestren los elementos principales de los sistemas que operan, registros de los sistemas que operan con detalle de costos y fecha de instalación, catastro actualizado de las conexiones, geográfico y en base de datos en la que consten, entre otros, los datos necesarios para ubicar la propiedad beneficiada con las previstas de servicios, identificar el abonado, caracterizar el tipo de servicio y realizar las labores de facturación y cobro, censo actualizado de las poblaciones ocupantes de terrenos en precario y de la condición en que se encuentran con respecto al uso de los servicios, programa de protección del recurso hídrico para garantizar la sostenibilidad, programas anuales de mantenimiento de sus sistemas, registros de quejas y denuncias así como su respectivo trámite, investigación, acciones y sus resolución, resultados de encuestas sobre la percepción de la calidad de los servicios, entre otros.

Además, los artículos 63, 64 y 65 del mismo Reglamento de Técnico de ARESEP, indican que los prestadores deben publicar en el diario oficial La Gaceta y en los medios que consideren oportunos, todo procedimiento o requisito referido a la prestación de los servicios y sus trámites cuando estos modifiquen o crean obligaciones o derechos, junto con los instructivos, reglamentos, manuales, formularios, protocolos y demás documentos complementarios y estar ubicados en los lugares de atención al público, así como en su sitio web, si contara con uno. También, brindarán a sus abonados e interesados la información necesaria que les permita conocer las características de los servicios que reciben, las tarifas fijadas por la Autoridad Reguladora; así como informar oportunamente a los abonados los lugares y medios habilitados para la cancelación de las facturas.

No se omite indicar, que tanto el artículo 78 del Reglamento de prestación de servicios de AyA como el 102 del Reglamento Técnico de ARESEP, detallan toda la información que debe estar contenida en las facturas emitidas con ocasión de la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento, y que de acuerdo al artículo 103 del mismo Reglamento Técnico de ARESEP, debe entregarse con 10 días naturales antes de su vencimiento para información del usuario previo al pago del servicio, concretamente: a) Nombre y logotipo del prestador; b) Cédula jurídica, dirección física, electrónica o sitio web, números de teléfonos y fax del prestador; c) Nombre del abonado; d) Localización; e) Número de identificación del servicio; f) Número de medidor; g) Periodo al cobro; h) Fecha de vencimiento; i) Fecha y lectura anterior; j) Fecha y lectura actual; k) Número de días del periodo de cobro; l) Número de factura; m) Consumo mensual, n) Tipo de tarifa; o) Historial de consumo de los últimos seis meses; p) Desglose del monto por tipo de servicio y tarifa; q) Monto por pagar por arreglos de pago, de existir; r) Monto total; s) Monto del cargo por mora; t) Espacio para avisos, entre otros.

En otro orden de ideas, debemos destacar que en Costa Rica se habilitan los tipos de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento, individual y compartido, siendo la regla general, el que los servicios se brinden de forma individual por medio de la conexión del sistema público de abastecimiento de agua o saneamiento con los sistemas internos de la propiedad necesarios para el abastecimiento de los inmuebles, y cuyos requisitos para su constitución, se describen en el Reglamento para la prestación de los servicios de AyA, específicamente; artículo 52 para el caso de inmuebles inscritos en el Registro Inmobiliario del Registro Nacional de Costa Rica, y artículo 54 para el caso de inmuebles ocupados en posesión legal y sin inscripción registral. Al respecto, el artículo 5 del Reglamento para la prestación de los servicios de AyA, define como:

* **Conexión:** Unión del sistema público de abastecimiento de agua o de saneamiento sanitario con el sistema privado.
* **Servicio de abastecimiento:** Corresponde al suministro de agua para consumo humano que brinda AyA; también denominado como servicio de agua.
* **Servicio de recolección o alcantarillado sanitario:** Red pública de tuberías y estaciones de bombeo cuyo objetivo es el transporte de las aguas residuales hasta su punto de tratamiento.
* **Servicio de saneamiento:** Corresponde a la integración de los Servicios de Recolección (Alcantarillado Sanitario), Servicio de Tratamiento y Disposición Final de las aguas residuales.
* **Sistemas internos de la propiedad:** Sistemas de agua y de saneamiento que se encuentran dentro de un inmueble, necesarios para el disfrute de los servicios y que se encuentran bajo la responsabilidad del usuario.
* **Sistema público:** Sistema de agua o de saneamiento administrado y operado por AyA u otro operador delegado.

No obstante la regla general, también es técnica y legalmente factible brindar el servicio de agua potable de forma compartida o colectiva, siendo este tipo de servicio, dirigido de forma colectiva a los mismos usuarios individuales o ciudadanos no registrados como usuarios del operador respectivo, y para lo cual, el artículo 7 de la Ley N°1637, faculta a los operadores del servicio público de agua potable, para instalar fuentes de agua potable públicas o de aprovechamiento gratuito, a fin de que los ciudadanos puedan abastecer sus necesidades básicas de aseo. Por su parte, el artículo 112 del Reglamento Técnico de ARESEP, también faculta a los operadores en general, para instalar fuentes públicas de ornato, la cual se describe en el artículo 5 del mismo Reglamento de ARESEP, como; “estructura ornamental que utiliza agua y que está ubicada en sitios públicos”, de forma que sea de acceso a cualquier habitante o visitante de la república en general, siendo factible el que la fuente de ornato, sea facturada a nombre de la entidad pública propietaria o administradora del espacio público en general, o bien a título gratuito según lo determine el operador respectivo.

Además, los artículos 28 del Reglamento Técnico de ARESEP y 90 del Reglamento para la prestación de los servicios de AyA, imponen el abastecimiento colectivo por medio de la fuente pública dirigidas a los usuarios de determinada comunidad o sector, y cuyos servicios calificados en tarifa domiciliar han sido suspendidos por morosidad en la última factura puesta al cobro para cada servicio individual en específico, siendo la fuente, instalada para atender a los usuarios de un radio de hasta 200 metros de distancia por cada fuente instalada, de forma que los usuarios que lo requieran en eses radio de distancia, puedan satisfacer sus necesidades básicas de aseos por el tiempo de que sus servicios individuales estén suspendidos por morosidad.

Otras de las formas de abastecimiento colectivo que se habilita en la legislación costarricense, se plasma por medio del artículo 33 del Reglamento de ARESEP, el cual indica que ante la interrupción temporal del servicio de agua potable que se prolongue por más de ochos horas naturales, sea por suspensiones programadas, suspensiones no programadas, o suspensiones por fuerza mayor o caso fortuito, el prestador está obligado a brindar un servicio alternativo de suministro de agua potable a los abonados, que cubra las necesidades de hospitales, clínicas y centros de salud; y necesidades básicas de los abonados domiciliares. Los servicios alternativos de suministro del servicio de acueducto podrán ser camiones cisterna, tuberías temporales u otro medio, siempre que éstos garanticen que el agua distribuida reúna la característica de calidad potable y asegure una dotación mínima de subsistencia a la población afectada, y se define en el artículo58 del mismo Reglamento de ARESEP.

De igual forma, el abastecimiento colectivo se plasma en el artículo 46 del Reglamento de ARESEP y artículo 55 del Reglamento para la prestación de los servicios de AyA, los cuales habilitan la prestación colectiva del servicio a lo internas de fincas o terrenos invadidos en condición precaria y campamentos de damnificados, siendo el fundamento de este tipo de servicio, el reconocimiento del acceso al agua como un Derecho Humano básico. Asimismo, el artículo 56 del Reglamento de AyA, habilita el servicio compartido y temporal, para actividades no permanentes, tales como las ferias del agricultor, turnos, festejos populares, circos y otros similares, siendo que en uno u otro caso, únicamente debe cumplirse por parte de los interesados con cada uno de los requisitos técnicos y legales establecidos en la norma reglamentaria respectiva.

Por último, se detalla que, como norma general, el artículo 3 de la Ley N°7593, establece que el modelo de gestión del servicio de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento se brinda bajo el principio de servicio público y al costo, siendo el prestador del servicio, el sujeto público o privado que presta servicios públicos por concesión, permiso o ley, siendo que el caso de Costa Rica, se distinguen los siguientes operadores públicos:

* INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS LEY CONSTITUTIVA N°2726.
* EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA - LEY CONSTITUTIVA N°5889.
* MUNICIPALIDADES - LEY GENERAL DE AGUA POTABLE N°1634, Y LEY CONSTITUTIVA N°2726.
* ASOCIACIONES ADMINISTRADORES DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO COMUNALES “ASADAS” - ARTÍCULO 2 INCISO G) DE LA LEY CONSTITUTIVA N°2726.

Cabe detallar con respecto a las ASADAS, que AyA mediante convenio suscrito al efecto, previo acuerdo favorable de su Junta Directiva, podrá delegar la administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de acueductos y/o alcantarillados comunales, a favor de asociaciones debidamente constituidas e inscritas de conformidad con la Ley de Asociaciones N°218 del 8 de agosto de 1939, sus modificaciones y respectivo Reglamento, de forma que sean los propios ciudadanos de determinada comunidad, los responsables de proveer el servicio de agua potable en esa comunidad.

La única excepción la regla, la enmarca el modelo de gestión por medio de autoabastecimiento para el caso de condominios y que se habilita en el Decreto Ejecutivo N°35271-S-MINAE, denominado “Reglamento para el permiso de perforación y concesión de pozo concesión de agua para el autoabastecimiento en Condominios”, publicado en La Gaceta N°105 del 02 de junio de 2009, y que será aplicable, únicamente en aquellos condominios ubicados en zonas donde no exista disponibilidad de agua potable a cargo de alguno de los operadores públicos antes referidos.

Estos dos últimos modelos de gestión (ASADAS - Autoabastecimiento), evidencian la participación cuidada de forma directa en la administración y operación de la prestación de los servicios públicos aquí referidos.

De tal manera, AyA es una entidad de servicios públicos que tiene una misión: asegurar el acceso universal al agua potable y al saneamiento de forma comprometida con la salud, la sostenibilidad del recurso hídrico y el desarrollo económico y social del país, y una visión: ser la institución pública de excelencia en rectoría y gestión de los servicios de agua potable y saneamiento para toda la población del país; ambos la visión y la misión están acordes con el marco de los derechos humanos.

En el plan estratégico 2016-2020 dentro de la perspectiva de procesos internos, se establece el objetivo PPI-05: *Brindar un servicio de agua potable eficiente, de acuerdo con la normativa vigente, que contribuya a la satisfacción de las necesidades de los usuarios, dentro del área de cobertura de los sistemas de AyA*. El resultado de este objetivo es agua de calidad potable, con continuidad y presión adecuadas, que cumpla con la normativa vigente. El objetivo cuenta con cinco iniciativas que miden la cobertura de agua de calidad potable en sistemas operados por AyA, porcentaje de población con servicio de agua potable continuo, porcentaje de puntos de presión que cumplen la norma, plazo en reparación de fugas sin bacheo, en los sistemas de agua potable AyA, plazo en reparación de fugas con bacheo, en los sistemas de agua potable AyA.

Como se indicó anteriormente, cuenta con un marco jurídico y reglamentario para poder brindar en forma adecuada el servicio de agua potable. En el caso del reglamento interno de prestación de servicio se especifican aspectos de calidad: acordes con el Reglamento de Calidad del Agua del MINSA, cantidad: donde se establecen presiones mínimas de servicio, así como la continuidad: horas de servicio, todo acorde con la calidad del servicio que debe prestarse (artículos 7 y 11). De igual forma existe un Reglamento técnico emitido por la ARESEP que también regula estos aspectos (artículos 26, 27, 30, 31, 32).

Además, con base en el informe elaborado por el Laboratorio Nacional de Aguas de AyA, titulado “AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO Y SANEAMIENTO EN COSTA RICA AL 2019: BRECHAS Y DESAFÍOS AL 2023”, la prestación del servicio de agua para consumo humano en Costa Rica permite abastecer a “un 97,8% de población cubierta con agua intradomiciliar (4.946.095 habitantes) y un 93,0% (4.703.0989 habitantes) con agua gestionada de forma segura; no obstante, el 1,8% de la población (92.253 habitantes) recibe servicio con tubería en el patio, y aún persiste un 0,4% (21.382 habitantes) que no tienen servicio y se abastecen directamente de pozos y nacientes artesanales.”.

Según los datos de cobertura que se detallan en el informe que se cita, la misma integra distintas figuras de operadores autorizados para brindar los servicios de abastecimiento de agua potable y de saneamiento de aguas residuales dentro del territorio nacional, específicamente:

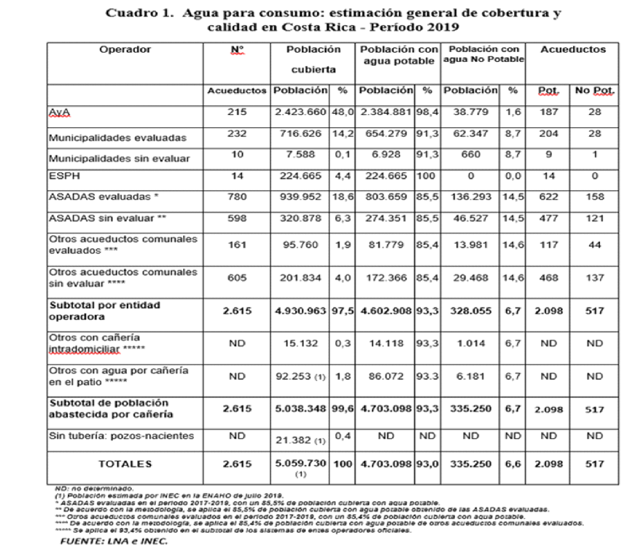
* Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), creado a partir de la Ley N° 2726 del 14 de abril de 1961; actualmente es responsable directamente del abastecimiento del **48%** de la población y, de un **24,9%** adicional, a través de la delegación del servicio público en una entidad privada autorizada para ello, al amparo de la Ley 2726 y aplicando la normativa reglamentaria creada para tales efectos. Estos entes autorizados se denominan Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS).

Actualmente, en el país existen agrupaciones que no han suscrito un convenio de delegación con el AyA, se estima que abastecen un **5,9%** de la población.

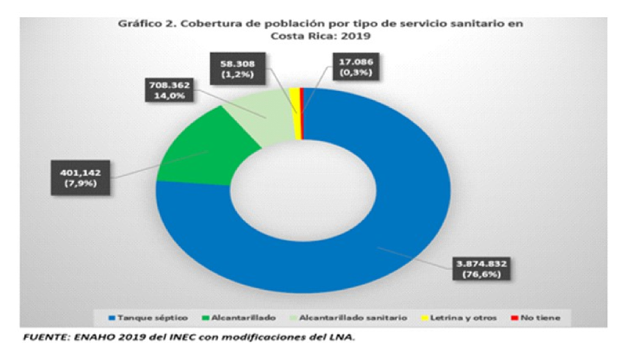
* Municipalidades (gobiernos locales) que de conformidad con la Ley 2726, continuaron con la prestación del servicio público en el tanto suministren un servicio eficiente; estos entes operadores abastecen aproximadamente al **14,3%** de la población.
* Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), cuya figura es la de sociedad anónima de utilidad pública (Ley N° 7789 del 28 de abril de 1998), es decir una empresa municipal que gestiona recursos públicos y cuyo patrimonio está constituido por todos los acueductos de los municipios asociados; la ESPH abastece aproximadamente a un **4,4%** de la población.

Adicionalmente, existen en el país otras figuras que aplican el autoabastecimiento, sin embargo, **no están autorizados para brindar un servicio público como tal.** Entre ellas se incluye la figura del condominio que se rige por el Reglamento para el Permiso de Perforación y Concesión de Agua para el Autoabastecimiento en Condominios (Nº 35271-S-MINAET y sus reformas), con la salvedad de que dicho autoabastecimiento se extingue cuando un operador público está en capacidad de brindar el servicio. También, existe la figura de la Sociedades de Usuarios (SUA) que se rigen por la Ley de Aguas N° 276, y independientemente de la actividad económica por la cual se asocian, se les permite utilizar parte del caudal concesionado para dicha actividad, para su autoconsumo. Esta modalidad de autoabastecimiento está incluido dentro del **2,1%** restante (con cañería intradomiciliar o cañería en el patio).

El detalle por ente operador se muestra en el cuadro 1 del informe que se cita:



Respecto al tema de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales (saneamiento de aguas residuales), en Costa Rica subsiste el modelo de gestión colectivo y el individual, el primero a cargo de los entes operadores autorizados que se explicaron para el servicio público de agua potable. Con base en el informe elaborado por el Laboratorio Nacional de Aguas de AyA, a partir de datos de la Encuesta de Hogares a julio del 2019 (ENAHO) se tiene que en el 2019 el 76,6% de la población utiliza el sistema individual de tanque séptico, según se detalla en el siguiente gráfico; se aclarta que el término “alcantarillado” se refiere a “cloaca” y el de “alcantarillado sanitario” incluye la recolección a través de un sistema público e incluye tratamiento secundario.



En relación con el Derecho Humano al Saneamiento, el 7 de marzo de 2017 el Poder Ejecutivo firmó la “Política Nacional de Saneamiento en Aguas Residuales 2016- 2045”, que considera los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) y proyecciones de cómo alcanzar el objetivo 6 tanto para el área urbana como rural en todo el país. El documento se divide en tres partes fundamentales: un diagnóstico del estado del saneamiento, la definición de problemas y soluciones y un plan de gestión para solventar dichos problemas. Entre las soluciones se encuentra la generación de nueva infraestructura, la búsqueda de la sostenibilidad financiera de los servicios, la participación ciudadana, el fortalecimiento de las instituciones y normas para la gestión integrada de los recursos.

Asimismo, es importante agregar que el Proyecto Abastecimiento del Acueducto Metropolitano (PAAM) se ha diseñado con la intención de preservar una base de estándares adecuados de calidad del servicio de agua potable desde el punto de vista de Salud Pública. Esta calidad se mantendrá tanto en el proyecto de abastecimiento principal que llevará 2,5 m3/s a una población aproximada de un millón de personas, así como en los sistemas a nivel rural y comunitario periférico, que posee riesgos de afectación en distintas formas, tanto en la fase de operación como construcción del proyecto. La institución se encuentra realizando todos los estudios de análisis de cantidad, calidad y accesibilidad, para que en todas las comunidades del Área de Influencia Directa del PAAM, se resguarden los servicios de abastecimiento de agua y de esta manera monitorear su calidad de una forma continua.

En el Proyecto mediante un análisis costo beneficio financiero y económico, utilizando factores de conversión publicados por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), se determinó que para el AyA y para la sociedad en general el mismo es rentable y deseable.

A mayor abundamiento, se anexa el *Informe Acciones para asegurar el Derecho al acceso al agua*, como complemento al presente Cuestionario.

# Igualdad de género (2015) [(A/HRC/33/49)](http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/33/49&Lang=E)

La desigualdad de género es omnipresente en todas las etapas de la vida de la mujer: desde la infancia, pasando por la pubertad, la edad adulta, la maternidad y la edad adulta tardía. Cuando se trata de la falta de acceso al agua y al saneamiento, las mujeres y las niñas se ven afectadas de manera desproporcionada, ya que son las principales responsables del agua y la higiene a nivel doméstico y soportan la mayor carga en la recogida de agua. Aunque las mujeres pueden sufrir desventajas y discriminación desproporcionadas, no pueden considerarse un grupo homogéneo. Las mujeres se encuentran en situaciones muy diversas y se enfrentan a diferentes retos y barreras en relación con el agua, el saneamiento y la higiene. La interseccionalidad exacerba las desigualdades basadas en el género, cuando éstas van unidas a otros motivos de discriminación y desventajas. Por ejemplo, cuando las mujeres y las niñas carecen de acceso adecuado al agua y el saneamiento y al mismo tiempo sufren de pobreza, viven con una discapacidad, padecen de incontinencia, viven en zonas remotas, carecen de seguridad de tenencia en su vivienda, están encarceladas o no tienen hogar. En esos casos, es más probable que carezcan de acceso a instalaciones adecuadas, que se enfrenten a la exclusión o que experimenten vulnerabilidad y riesgos adicionales para la salud. Además, otros problemas son el acceso a los retretes para las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales y de género no definido, así como el aumento del riesgo de violencia de género.

Pregunta(s):

1. Durante el último decenio (2010-2020), ¿qué medidas (que van desde las de carácter jurídico, normativo, reglamentario y presupuestario hasta las de capacitación) se han aplicado para corregir las desigualdades de género en el suministro de agua y saneamiento abordando la discriminación por motivos de género? Alternativamente, ¿qué medidas se han centrado en la corrección de la discriminación por motivos de género abordando las desigualdades en el suministro de agua y saneamiento? ¿Cuáles son las medidas concretas adoptadas y los efectos observados?

R/ Desde el punto de vista jurídico se promulgó la modificación a la Constitución Política, con el fin de incluir el Derecho de Acceso al Agua, como principio fundamental. Asimismo, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, reglamenta las relaciones, derechos y obligaciones entre AyA y sus usuarios; surgidas de la disponibilidad y prestación efectiva de los servicios públicos de abastecimiento de agua para uso poblacional y saneamiento de aguas residuales en todo el territorio nacional y con un enfoque de derecho humano. En ese sentido, se emite el último Reglamento de Prestación de Servicios de AyA, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 242, Alcance N°285 de fecha 19 de diciembre de 2019.

Tal y como se indicó en el Ítem 1 de este cuestionario, los artículos 21 y 50 de la Constitución Política de Costa Rica, establecen que todos los habitantes de la República tienen derecho a la vida y a un ambiente ecológicamente equilibrado, lo cual, entre otras cosas, se desarrolla por medio del acceso a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento. Además, el artículo de artículo 33 la propia Carta Magna, establece que toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana, a lo cual abona el artículo 48, que toda persona tiene derecho al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los otros derechos consagrados en la Constitución, así como de los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables en la República.

Además, el acceso a los servicios básicos de agua potable y alcantarillado sanitario, en favor de las mujeres y niñas en general, se garantiza en Costa Rica a través de la observancia del antes citado artículo 14 de “LA CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER”, que indica que los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán entre otros derechos; gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones. Por su parte, los artículos 6 y 24 de “LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO”, establecen que los Estados Parte reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida, así como al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud, mediante, entre otras cosas, la aplicación de tecnologías de fácil acceso y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente y asegurar atención sanitaria apropiada a las mujeres embarazadas.

Para tales efectos, y con fundamento en los artículos 5 inciso j) y 11 inciso i) de la Ley N°2726, es pertinente indicar que en la última década (2010-2020), AyA promulgó el Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, publicado en La Gaceta N°77 del 22 de abril de 2015 y su modificación publicada en La Gaceta N°106 del 02 de junio de 2016, el cual derogado por el artículo 86 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, publicado en el Alcance N°181 de La Gaceta N°184 del 05 de octubre de 2018, y que fue derogado por el artículo 105 del Reglamento para la prestación de los servicios de AyA, publicado en el Alcance N°285 de La Gaceta N°242 del 19 de octubre de 2019.

Dichos Reglamentos, en concordancia con los artículos 62, 66, 68 y 69 del Reglamento Técnico de ARESEP; han establecido los diferentes requisitos técnicos y legales, necesarios para brindar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento, a propietarios registrales de inmuebles y poseedores legales de inmuebles sin inscripción registral, siendo indiferente, el que el titular del inmueble sea del género femenino, masculino, menor o mayor de edad, persona física o jurídica, pública o privada. Actualmente, el artículo 5 del Reglamento vigente, define al solicitante de los servicios, como toda persona física o jurídica que tiene el derecho a gozar y disponer de un bien inmueble sin más limitaciones que las contenidas por ley, sean estos un inmueble inscrito, un inmueble sin inscribir, así como inmuebles en concesiones, asignaciones y arriendo que se dan bajo la modalidad de terrenos especiales administrados por El Estado a través de sus instituciones con régimen jurídico especial.

Además, es importante indicar que el artículo 12 y el artículo 14, inciso h de la Ley 7593 de la Autoridad de los Servicios Públicos, se reconoce como un derecho del usuario, la No discriminación en la prestación de los servicios públicos, sin importar grupo, sector, clase o consumidor individual. Se transcriben a continuación los artículos citados:

Artículo 12.- Prohibición de discriminación

Los prestatarios no podrán establecer ningún tipo de discriminación contra un determinado grupo, sector, clase o consumidor individual. No constituirán discriminación las diferencias tarifarias que se establezcan por razones de orden social.

Artículo 14.- Obligaciones de los prestatarios

Son obligaciones de los prestatarios:

h) Admitir, sin discriminación, el acceso al servicio a quienes lo soliciten dentro de su campo.

En ese sentido, para abordar el tema de las desigualdades de género en el suministro de agua, el PAAM realizó los respectivos estudios poblacionales para SETENA y MIDEPLAN, que se encargaron de identificar las condiciones actuales requeridas en relación al acceso de las mujeres al servicio de agua, las tarifas utilizadas hoy en día y la disponibilidad a pagar este servicio en el futuro con la entrada del nuevo proyecto de abastecimiento con los beneficios que esto significa, de aumentar las condiciones de calidad, cantidad y frecuencia en el abastecimiento de agua para la mayoría de la población del valle central del país. Además, específicamente el Proyecto aporta en la mejoría de las condiciones de género, en vista del significado que tiene el agua para las mujeres en su cotidianidad.

Es importante destacar los beneficios económicos positivos que este proyecto tiene para las mujeres, género sobre el cual recae históricamente la responsabilidad de buscar agua para realizar tareas domésticas. Las mejoras en el suministro de agua también aumentan el valor de las propiedades e impulsan el desarrollo de las localidades.

Asimismo, de acuerdo a la Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género de Costa Rica: *“…la participación paritaria de las mujeres y hombres en los procesos de toma de decisiones y en el desempeño de las funciones de planificación, técnicas y administrativas, tanto en el ámbito público como en el privado, constituye una aspiración básica del desarrollo humano sostenible que contribuye al fortalecimiento de la democracia*”, (INAMU, 2007); se incorporaron datos, según disponibilidad, para visibilizar la presencia de poblaciones masculinas y femeninas, dentro del análisis. Para tener en cuenta estos aspectos se identificaron los siguientes objetivos, que son incorporados de forma trasversal en los capítulos del Estudio de Impacto Ambiental: a) Análisis de contexto mediante la recopilación de datos por sexo (desagregados). b) Análisis de la situación de hombres y mujeres (problemas, necesidades, limitaciones, oportunidades) en el contexto del proyecto.

En relación a las medidas de carácter presupuestario aplicadas para corregir las desigualdades de género en el suministro de agua y saneamiento abordando la discriminación por motivos de género, en el AyA, se contempla el suministro de agua y saneamiento para la población, sin importar condición social, económica, edad, género, etc. Este pensamiento integral se desarrolla desde la formulación del Plan Nacional de Desarrollo y su integración con el Plan Estratégico, Plan Operativo y Presupuesto Institucional. En la formulación de los objetivos, indicadores, metas y presupuesto no se presenta la desigualdad de género.

Finalmente, en relación a la ejecución de proyectos, para el año 2020 se tiene programada la ejecución del proyecto, Extensión ramal desde Buenos Aires hasta Rosas de Salitre, Buenos Aires, Buenos Aires, Puntarenas, el cual cabe dentro del Subeje2: Agua potable, saneamiento, electricidad, comunicaciones, telefonía. El proyecto consiste en construir una extensión de ramal desde el acueducto de Buenos Aires hasta la territorio indígena de Salitre, para poder dotar de agua potable a dicha comunidad, de igual manera esta subgerencia participa en la Comisión para mejorar el abastecimiento de agua en territorios indígenas, relacionado al eje I de la política, además de la comisión de comunidades vulnerables, que también abarca poblaciones afrodescendientes, migrantes y refugiados.

De igual manera en el año 2019 entró en operación el Proyecto Limón Sur, que abastece de aguas a parte de estas comunidades vulnerables.

En el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se construye el Programa para la atención institucional con pueblos y territorios indígenas, con base en el acuerdo de Junta Directiva N° 2018-078 y liderado por la Presidencia Ejecutiva, el cual reza: "Crear un programa para fortalecer la oferta institucional de AyA orientada a mejorar el acceso y la prestación de servicios de agua potable y saneamiento a los pueblos indígenas, contribuyendo a la equidad social, la buena gobernanza y la protección del recurso hídrico. fomentando y facilitando la participación activa de la ciudadanía en construcción de las soluciones de tal manera que este se oriente a alinear y articular dicha oferta a las necesidades, expectativas y realidad sociocultural de los pueblos indígenas."

Al respecto, se trabaja en la licitación pública para contratar la realización de un diagnóstico en los 24 territorios indígenas del país, con el propósito de elaborar una línea base respecto a las condiciones de abastecimiento de agua potable y saneamiento en dichos territorios, desde una perspectiva sociocultural y con enfoque territorial, que permita disponer de información actualizada y pertinente respecto a ta demanda y la oferta de servicios especializados en este campo, de manera que el Programa Institucional de Atención a Territorios y Pueblos Indígenas cuente con los fundamentos para definir las estrategias y acciones de intervención.

Lo anterior mediante la identificación, descripción y explicación de los sistemas de gobernanza territorial y de gestión sociocultural del agua (cosmovisión y prácticas); la identificación de las necesidades (demanda) de agua potable de la población y saneamiento en sus territorios; la identificación de los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano existentes en los territorios, la población usuaria y los métodos para el mantenimiento operativo y de distribución; y la identificación de las necesidades de capacitación y de insumes materiales para el funcionamiento de estos sistemas.

En el marco del Programa para la atención institucional con pueblos y territorios indígenas, se trabaja en los procedimientos para implementar la gestión de calidad del programa y la evaluación de este, en sus procesos de construcción e implementación.

En cada fase (pre - durante construcción y gestión integral de los sistemas) del ciclo de los proyectos institucionales, se promueve la participación idónea de la población indígena desde un abordaje intercultural con enfoque etario, de genero y contextúa! que permita la inclusión efectiva de las poblaciones indígenas. La ejecución de muchos de estos proyectos se dificulta por la dispersión de sus habitantes, la topografía y las dificultades de acceso. Por ejemplo, en las comunidades cabecares de Alto Bley y Bekbatá, en Telire. Alta Talamanca, donde habitan 110 personas, la construcción implica trasladar tanques, tubería, accesorios, funcionarios y funcionarías en varios viajes de helicóptero.

En el diagnóstico mencionado, se implementarán también como variables de análisis la edad, género, contexto y cultura. Así. AyA ejecuta y construye el abordaje institucional con enfoque integral para atender a las poblaciones indígenas del país.

Sobre el proceso de consulta definido por el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT, en AyA se mantienen alianzas sólidas y continuas con entidades como la Defensoría de los Habitantes de la República (DHR) y su Dirección de Protección Especial, especialistas en esta materia; también con la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), el Consejo Nacional de Salud de Pueblos Indígenas (CONASPI), el Consejo Local de Salud de Pueblos Indígenas (COLOSPI). el Ministerio de Educación Pública, el Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano y el Ministerio de Justicia y Paz (MJP). Con estas entidades se trabaja conjuntamente en casos específicos donde se implementan procesos consultivos continuos por parte de AyA; a la vez, se han propiciado capacitaciones y asesorías a personal de AyA, y desde AyA hacía funcionarios y funcionarías de otras instituciones sobre las experiencias institucionales basadas en buenas prácticas en esta materia.

En AyA se promueve que durante todas las fases del ciclo de proyectos sea informada y consultada la población indígena de manera inclusiva (intercultural, etaria. género y contextual), siguiendo lo estipulado por el convenio citado. En los proyectos. las y los funcionarios de la institución se acompañan de indígenas intérpretes español-ídioma indígena para cumplir con el proceso de información y consulta que exigen los convenios internacionales en esta materia, considerando sus condiciones socioculturales, educativas, generacionales y de género.

Dichas acciones quedarían oficializadas en los procedimientos que se construyen actualmente, no obstante, esto se está promoviendo desde hace varios años, y ha implicado un cambio de paradigma institucional, en el cual es fundamental continuar trabajando.

El diagnóstico mencionado aportará la compilación de la experiencia existente en AyA sobre el abordaje intercultural en la atención institucional con pueblos y territorios indígenas, con la finalidad de vincularla con los resultados de la línea base y generar una propuesta institucional de dicho abordaje con enfoque intercultural.

Esto permitirá contar con la sistematización del cumplimiento efectivo a nivel institucional de las obligaciones internacionales vinculantes y nacionales en derechos humanos de los pueblos indígenas en cuanto al abastecimiento de agua potable como derecho humano articulado con los derechos culturales, incluyendo por supuesto y continuamente las acciones consultivas. Asimismo, los procedimientos de evaluación que se construyen actualmente considerarán estos esfuerzos institucionales y sus resultados.

Como material importante, se anexa el Informe Atención de Comunidades Indígenas 2019.

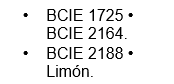
# Cooperación para el desarrollo (2016 y 2017)

En el primer informe [**(A/71/302)**](http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/71/302&Lang=E) se presenta un análisis preliminar de los vínculos entre la cooperación para el desarrollo y los derechos humanos en materia de agua y saneamiento, en el que se abordan los enfoques de derechos humanos de los financiadores, la evolución de la cooperación para el desarrollo en el sector y las tendencias de las modalidades de financiación. Sobre la base del marco teórico elaborado en el primer informe, en el segundo informe [**(A/72/127)**](http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/72/127&Lang=E) el Relator Especial examinó la forma en que los financiadores contribuyen a la realización de los derechos humanos al agua y el saneamiento mediante un análisis empírico de seis casos de estudio. Tras examinar las políticas, los instrumentos operacionales y los instrumentos de proyectos de seis financiadores diferentes, a lo largo del ciclo de cooperación para el desarrollo, el Relator Especial constató que el marco de derechos humanos no está incorporado adecuadamente en sus programas de desarrollo, con diversos grados de ajuste a este marco. Si bien algunas políticas de los financiadores tienen en cuenta el marco de derechos humanos, en particular los derechos humanos al agua y el saneamiento, otras sólo se ajustan esporádicamente a esos derechos y revelan una claridad limitada en cuanto a su aplicación a la cooperación para el desarrollo. De la misma manera, aunque la mayoría de las evaluaciones de los proyectos de los financiadores se centran principalmente en el logro de los objetivos de los proyectos y la sostenibilidad de los servicios, no se observó una evaluación específica basada en los derechos humanos durante la ejecución de los proyectos ni una vez concluidos.

Pregunta(s):

1. Durante el último decenio (2010-2020), ¿qué esfuerzos han realizado los agentes pertinentes (incluidos los financiadores, los Estados asociados, los socios implementadores y otros) para armonizar las políticas y operaciones de cooperación para el desarrollo con el marco de los derechos humanos en materia de agua y saneamiento? Por ejemplo, ¿existen ejemplos de proyectos que hayan:
2. Guardado el equilibrio de los proyectos de agua y saneamiento, así como de la cobertura de esas intervenciones, entre las zonas urbanas y rurales de una manera compatible con la realización progresiva de los derechos al agua y el saneamiento en cada contexto;
3. Asegurado que la selección, el diseño y la ejecución de los proyectos apliquen el marco de los derechos humanos al agua y el saneamiento, dando prioridad en particular a las personas que se encuentran en las situaciones más vulnerables;
4. Asegurado que la concepción y la ejecución de los proyectos se lleven a cabo de manera transparente con la participación de todas las partes interesadas, proporcionando un amplio acceso a la información pertinente e incluyendo mecanismos para abordar la rendición de cuentas de los financiadores e implementadores;
5. Asegurado la conciliación entre una estrategia de financiación sostenible para la prestación de servicios a largo plazo y el acceso asequible a los servicios para todas las personas;

R/ AyA por medio de entes de Cooperación como los Bancos KfW, BCIE, etc han desarrollado programas de abastecimiento y saneamiento para aumentar la cobertura y disponibilidad de la oferta en zonas determinadas como ciudades intermedias y zonas costeras donde existía un retraso en la infraestructura de abastecimiento y saneamiento. Se pueden citar al menos los programas:



La institución ha laborado en dos ejes de desarrollo, tanto el de abastecimiento como el de saneamiento en aquellas zonas más vulnerables y de mayor hacinamiento que debido a sus características territoriales y actividades económicas requieren de una solución global de saneamiento.

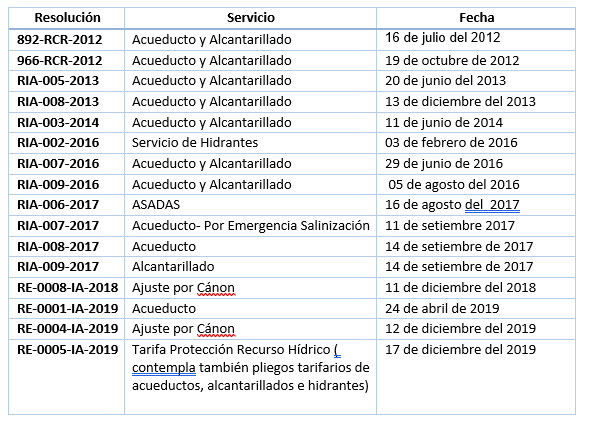
Con relación al tema de abastecimiento, la Institución fue creada para garantizar que los costarricenses cuenten con acceso universal al agua potable de calidad, misión que AyA ha venido ejecutando desde 1969. A través de los programas antes citados se ha logrado financiar proyectos que solucionaran necesidades de abastecimiento con al menos 25 años en zonas como San Ramón de Alajuela, Palmares, Puerto Jimenez, Ciudad Neily, Guácimo, Limón, Quepos.

De manera adicional en la proyección de crecimiento de los sistemas que administra AyA, se han incluido los sistemas delegados que podrían verse beneficiados con los proyectos de AyA; estos sistemas Delegados son conocidos como ASADAS. Las ASADAS son consideradas en la planificación de los proyectos de AyA, con la intención de mejorar aquellos sistemas que se requieran como por ejemplo agua en bloque o asumir aquellos sistemas que por sus condiciones no cuentan con fuentes de abastecimiento y no pueden garantizar a la población un acceso adecuado al agua potable.

La metodología que implementa AyA en sus proyectos es la definida por el Sistema Nacional de Inversión Publica (SNIP) a través de las políticas que define MIDEPLAN, por medio de un instrumento de Factibilidad para los proyectos de abastecimiento y saneamiento. La metodología incluye una factibilidad económica social, donde se debe involucrar a todos los sectores de la población que se verán beneficiados de manera directa o indirecta.

Para asegurar el equilibrio financiero en el corto plazo, se han presentado solicitudes de ajustes tarifarios, los cuales son valorados por la entidad reguladora, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para aprobar los respectivos incrementos solicitados.

Resultado de esas gestiones se han generado aumentos y ajustes tarifarios con las siguientes resoluciones:



En relación a citar ejemplos de proyectos, hacemos referencia a los incisos dispuestos en la presente consulta:

1. **Guardado el equilibrio de los proyectos de agua y saneamiento, así como de la cobertura de esas intervenciones, entre las zonas urbanas y rurales de una manera compatible con la realización progresiva de los derechos al agua y el saneamiento en cada contexto;**

En este caso el PAAM está realizando estudios en las fuentes de abastecimiento de las comunidades del trazado del Proyecto. En ese sentido se han dado las correspondientes solicitudes de parte del posible ente financiador del proyecto, en relación con la magnitud de cada impacto, para asegurar el uso social del agua en las comunidades que se afectarían. Como ejemplo, en la comunidad de Guatuso del Guarco se tiene en camino la ejecución de un Plan de Trabajo para proveer a la ASADA de ese sector, con un sistema de abastecimiento alternativo que responda de manera eficiente ante una emergencia por el impacto de la construcción de los túneles del Proyecto.

1. **Asegurado que la selección, el diseño y la ejecución de los proyectos apliquen el marco de los derechos humanos al agua y el saneamiento, dando prioridad en particular a las personas que se encuentran en las situaciones más vulnerables;**

El AyA ha dado peso en las restricciones y medidas de evaluación, a la capacidad del PAAM de cubrir las necesidades de las poblaciones en condición de alta vulnerabilidad social y económica que se beneficiarían con el entrada en funcionamiento del Proyecto. Se ha solicitado al equipo interdisciplinario a cargo del Proyecto la identificación de los principales indicadores sociales y económicos asociados a las poblaciones en vulnerabilidad en el país.

1. **Asegurado que la concepción y la ejecución de los proyectos se lleven a cabo de manera transparente con la participación de todas las partes interesadas, proporcionando un amplio acceso a la información pertinente e incluyendo mecanismos para abordar la rendición de cuentas de los financiadores e implementadores;**

El ente financiero ha realizado varias consultas al equipo a cargo del proyecto sobre el nivel de participación de la población en el proceso de evaluación de impactos positivos y negativos del proyecto y los respectivos mecanismos de monitoreo conjunto, transparencia institucional y rendición de cuentas a la población, asociados a las fases de construcción y operación. Se han establecido dentro de los instrumentos de evaluación y giras de campo, las principales situaciones de interacción social que requieren la participación de la población en la defensa de los intereses locales en cada sitio de obras por desarrollar.

Por su parte, la Dirección de Planificación de AyA, también hizo referencia a los incisos a) y b) en los siguientes términos:

# a) Guardando el equilibrio de los proyectos de agua y saneamiento, así como de la cobertura de esas intervenciones, entre las zonas urbanas y rurales de una manera compatible con la realización progresiva de los derechos al agua y el saneamiento en cada contexto;

Dentro de los esfuerzos que han realizado bancos externos, el Estado y el AyA, se tiene el Programa de Agua Potable y Saneamientos (PAPS).

El Objetivo General de este Programa es mejorar las condiciones ambientales y promover la salud de la población costarricense mediante la ampliación y rehabilitación de los servicios de agua potable y saneamiento en áreas rurales, periurbanas y urbanas, dentro de un marco que incentive el desarrollo institucional del sector, promueva la participación organizada de las comunidades, contribuya a la descontaminación de los ríos del Área Metropolitana de San José (AMSJ) y asegure la sostenibilidad de los sistemas en el mediano y largo plazo. El Programa está compuesto por los siguientes tres Componentes:

**Componente I**: Proyecto de Mejoramiento Ambiental del AMSJ

La prioridad de este proyecto radica en que el grueso de la población del Área Metropolitana de San José se verá beneficiada con la rehabilitación y ampliación del Alcantarillado Sanitario.

Los principales componentes del PMA AMSJ son:

1. Rehabilitación y extensión del sistema de alcantarillado de aguas residuales en sectores específicos del área metropolitana, con una extensión de 365 km de tubería.
2. Un túnel de trasvase con una longitud de 1,75 Km y un diámetro de 2,50 metros, para llevar las aguas residuales de los colectores de la zona sur hacia la cuenca del río Torres, reunirlas con las aguas de los colectores de zona norte y enviarlas a la planta de tratamiento.
3. Un emisario terrestre con una extensión de 3,11 kilómetros y un diámetro variable entre 1,60 y 2,40 metros, para la conducción final de los caudales de los colectores sur y norte hacia la planta de tratamiento.
4. Una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de alta tecnología a desarrollar en dos etapas; en el alcance del proyecto sólo se construirán las obras asociadas a la Etapa I, que consiste en el tratamiento primario o eliminación de sólidos. En la Etapa II se incorporará el tratamiento de lodos activados.

Previamente a la contratación de las obras se requiere adquirir y recuperar terrenos y servidumbres en los que se afincarán las obras que componen el proyecto.

Las obras se contratan mediante licitaciones públicas. Para su diseño y supervisión el proyecto contempló un quinto componente de consultoría y asistencia técnica, también adjudicado mediante una Licitación Pública Internacional. Dicha consultoría tiene pendiente únicamente una de sus tres etapas que consiste en la supervisión de las Redes y Colectores del Proyecto.

Este componente cuenta con una estructura de varias fuentes de financiamiento: BID, JICA, BNCR y Contrapartida AyA.

**Componente II:** Agua Potable y Saneamiento en áreas Rurales Prioritarias

Este componente, financiado con fondos donados por FECASALC, comprende sistemas rurales nuevos y proyectos de rehabilitación de agua potable en las Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados (ASADAS) de La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí, Santa Rosa de Pocosol, San José de Upala, Santa Fe de Guatuso, Santa Fe de los Chiles y la Comunidad Malécu, localizada en una reserva indígena, todas ubicadas en la zona norte del país.

Además, se proveerán 500 soluciones individuales de saneamiento en esa zona del país, que beneficiarán a la población más pobre que actualmente emplea letrinas con gran potencial de contaminación de mantos acuíferos.

Se financian acciones de fortalecimiento institucional de las ASADAS, educación ambiental y desarrollo comunitario, así como estudios hidrogeológicos para identificar acciones adicionales necesarias para la protección de las fuentes actuales e identificar la situación de las fuentes de otras ASADAS localizadas en la zona norte del país.

**Componente III**: Agua Potable y Saneamiento en zonas periurbanas del AMSJ

El Componente III financia proyectos de agua potable en zonas de bajos ingresos y Periurbanas de San José: La Carpio, La Capri, Sector Sur de Escazú, Sectores Marginales del Distrito Los Guidos, El Llano de la Alajuelita, Linda Vista de Río Azul, El Rodeo y Cascajal, Higuito de Desamparados, Matinilla de Santa Ana y Los Ángeles de Patarrá. En La Capri, Sector Sur de Escazú y Matinilla de Santa Ana, se revisará el alcance de obras realizadas por otras unidades con fuentes de financiamiento ajenas a las del Programa, con el fin de determinar si es necesario la modificación de alcance de este componente.

**b) Asegurando que la selección, el diseño y la ejecución de los proyectos apliquen el marco de los derechos humanos al agua y al saneamiento, dando prioridad en particular a las personas que se encuentran en las situaciones más vulnerables.**

En la selección, diseño y ejecución de los proyectos se prioriza la atención a las comunidades indígenas. La inversión en agua potable para los pueblos indígenas es una de las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los objetivos institucionales.

En los últimos 5 años se construyeron 18 acueductos en territorios indígenas con una inversión de ¢1.760,00 millones para 10 mil personas. Durante el 2019, se inauguraron proyectos en los territorios indígenas de Punta Burica, cerca de la frontera con Panamá, y Malecu en la zona norte.

Durante 2020, se realizará el diagnóstico de abastecimiento de agua potable y saneamiento en 24 territorios. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) tiene proyectado construir 13 acueductos para comunidades indígenas en 7 de sus territorios, para lo que la institución invierte ₡1.228 millones a efectos de garantizar el acceso al agua potable a esos pobladores. Los proyectos beneficiarán a 3.300 personas en los territorios de Telire (4 acueductos), Punta Burica (3), Salitre (2), Bribri de Talamanca, Tayní, Térraba y Zapatón.

La cartera de inversiones en comunidades indígenas se financia con el apoyo del Fondo de Asignaciones Familiares (Fodesaf), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Cooperación Española, y recursos propios AyA.

Asimismo, se están formulando los términos de referencia para realizar una Contratación cuyo propósito es: Elaborar una línea base respecto a las condiciones de abastecimiento de agua potable y saneamiento en territorios indígenas, desde una perspectiva sociocultural y con enfoque territorial, que permita disponer de información actualizada y pertinente respecto a la demanda y la oferta de servicios especializados en este campo, de manera que el Programa Institucional de Atención a Territorios Indígenas cuente con los fundamentos para definir las estrategias de intervención.

Lo anterior se realiza en atención al acuerdo de Junta Directiva No. 2018-78 que acuerda: “Crear un programa para fortalecer la oferta institucional de AyA orientada a mejorar el acceso y la prestación de servicios de agua potable y saneamiento a los pueblos indígenas, contribuyendo a la equidad social, la buena gobernanza y la protección del recurso hídrico, fomentando y facilitando la participación activa de la ciudadanía en construcción de las soluciones de tal manera que este se oriente a alinear y articular dicha oferta a las necesidades, expectativas y realidad sociocultural de los pueblos indígenas.”

# Asequibilidad (2016)

La asequibilidad, como criterio de derechos humanos, exige que el uso de las instalaciones y servicios de agua, saneamiento e higiene sea accesible a un precio asequible para todas las personas. Por lo tanto, el punto de partida para la adopción de decisiones por parte del Estado sobre la financiación y la política públicas de suministro de agua y servicios de saneamiento es que el agua y el saneamiento deben ser asequibles para todas las personas. Es imposible establecer una norma de asequibilidad de aplicación general a nivel mundial. Cualquier norma de ese tipo sería arbitraria y no puede reflejar los desafíos que las personas enfrentan en la práctica y el contexto en el que viven, incluido el monto que deben gastar en vivienda, alimentación y la realización de otros derechos humanos. La asequibilidad de los servicios de agua y saneamiento es muy contextual, por lo que los Estados deberían determinar normas de asequibilidad a nivel nacional y/o local. El marco de derechos humanos estipula un importante conjunto de parámetros para el proceso de establecimiento de normas de asequibilidad, en particular en lo que respecta a la participación. Como forma concreta de garantizar la asequibilidad para todas las personas y un sistema sostenible, los Estados deben elaborar estructuras adecuadas de precios, tarifas y subsidios. Los mecanismos para asegurar la asequibilidad en la práctica incluyen la financiación pública, las medidas selectivas, los niveles mínimos de protección social, los planes de tarifas y los subsidios, entre otros.

Pregunta(s):

1. Durante el último decenio (2010-2020), ¿qué medidas e instrumentos específicos (por ejemplo, mecanismos de financiación, planes de tarifas, subvenciones) se han aplicado para garantizar que las personas más desfavorecidas tengan acceso a los servicios de agua, saneamiento e higiene de manera asequible? ¿Quiénes son los grupos destinatarios de esas medidas e instrumentos? ¿Qué formato tienen esas medidas e instrumentos (por ejemplo, legislación nacional, políticas, reglamentación de la prestación de servicios, normas de asequibilidad)?

R/ Según se detalló en el primer ítem de este Informe, el artículo 3 de la Ley N°7593, establece que el modelo de gestión del servicio de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento, se brinda bajo el principio de servicio público al costo, lo cual se define como el principio que determina la forma de fijar las tarifas y los precios de los servicios públicos, de manera que se contemple únicamente los costos necesarios para prestar el servicio, que permitan una retribución competitiva y garanticen el adecuado desarrollo de la actividad.

El artículo 4 de la Ley N°2726, establece que para la fijación de tarifas se aplicarán criterios de justicia social distributiva, que tomen en cuenta los estratos sociales y la zona a que pertenecen los usuarios, de manera que los que tienen mayor capacidad de pago subvencionen a los de menor capacidad, con el propósito de obtener ingresos tales que respondan a la política financiera que para el Instituto señalan las normas legales correspondientes, y para lo cual, El Estado y sus instituciones de asistencia social podrán subvencionar, total o parcialmente, áreas o grupos de usuarios, que por sus condiciones económicas están incapacitados para pagar las tarifas establecidas.

Es importante verificar, que el artículo 120 del Reglamento Técnico de ARESEP, determina la obligación de los prestadores para cobrar las tarifas y precios fijados por la Autoridad Reguladora para prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado sanitario, hidrantes, especiales, conexos y gestión ambiental, a lo cual agrega el artículo 121, que la misma ARESEP establecerá el modelo, metodología y estructura tarifaria para la gestión ambiental y los servicios referidos.

Los grupos de destinatarios de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento están definidos en el artículo 73 del Reglamento para la prestación de los servicios de AyA, que establece la clasificación de los servicios según la condición y uso específico que se hace del servicio, específicamente; a) Domiciliar: que se aplicará para casas y apartamentos destinados exclusivamente a la habitación. En estos casos, el uso del agua es para satisfacer las necesidades domésticas de las familias., b) Ordinaria: que se aplicará a los servicios utilizados en locales destinados a actividades comerciales o industriales, cuyo uso es principalmente el de aseo., c) Reproductiva: aplicable a los servicios donde el agua es utilizada como parte indispensable del proceso productivo. Se excluyen a las empresas públicas y demás instituciones descentralizadas, incluidas dentro de la clasificación vigente en el sistema de cuentas nacionales del Banco Central., d) Preferencial: Se aplicará a las escuelas y colegios de carácter público, asociaciones de desarrollo comunal, las instituciones de beneficencia y culto (inscritas como tales y con personería jurídica) sin fines de lucro., y e) Gobierno: que aplica a los establecimientos del Gobierno General, según la clasificación vigente en el sistema de cuentas nacionales del Banco Central de Costa Rica. Incluidos los gobiernos locales o municipalidades.

En cuanto a mecanismos de financiación de los servicios públicos referidos, debemos destacar que el artículo 83 del Reglamento Técnico de ARESEP, habilita a los operadores públicos, para cobrar facturaciones pendientes de pago formalizando arreglos de pago, siendo que los artículos 95 y 96 del Reglamento de AyA, establecen los requisitos y condiciones de prima y cuotas permitidas para los arreglo de pago en general, siendo que en el caso de las condiciones, están pueden ser modificadas en favor del usuario por medio de la figura del arreglo de pago especial que habilita el artículo 110 del mismo Reglamento de AyA, y que permite aprobar un prima menor y un plazo de cumplimiento mayor con relación a las condiciones generales que establece el artículo 96 de referencia.

Cabe señalar, que conforme al artículo 4 de la Ley No. 2726, Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, de previa cita, se está trabajando en la creación en un sistema nacional de subsidios focalizado incorporado en el modelo tarifario.

Este subsidio se acoge al Decreto Ejecutivo Nº 39757 -MINAE “ **Política Tarifaria para los operadores de sistemas de agua potable y saneamiento denominada: “Universalización de los servicios públicos de agua potable y saneamiento (recolección y tratamiento de aguas residuales)”** y su respectiva modificación Decreto N° 40711-MINAE.

Dichos Decretos tienen por objetivo en el Capítulo IV “Acceso Universal a los Servicios” en los Artículos 9 y 10, que cita textualmente:

Artículo 9- El Estado debe procurar el acceso de la población, sin discriminación por la condición socioeconómica, a los servicios de agua potable y saneamiento, indispensables para la vida y salud de los habitantes del territorio nacional, procurando que los servicios se brinden con calidad, cantidad y continuidad, y que las aguas residuales sean recolectadas y tratadas en forma sanitariamente seguras.

Artículo 10- Se dispondrá de un sistema nacional de subsidios cruzados focalizados al suministro de agua potable y servicios conexos, así como al servicio de saneamiento, para garantizar el acceso a estos servicios, a los usuarios en condición de pobreza y pobreza extrema, el cual será financiado a través de la estructura tarifaria de los operadores, con el aporte de los usuarios que no sean clasificados en condición de pobreza y pobreza extrema, por las instancias del Estado responsables de las políticas y programas sociales, para la mitigación de la pobreza.

Asimismo, los financiamientos de los proyectos de inversión pública, que se desarrollan en AyA se llevan a cabo, para posponer su costo en el tiempo, con el fin de minimizar el costo de los servicios, para que estos sean asequibles por los usuarios.

En el caso de las zonas rurales, donde las poblaciones presentan problemas de rezago social, el estado subvenciona los proyectos, mediante el programa “Fondo de desarrollo de Asignaciones Familiares” (FODESAF).

Aunado a lo anterior, en el año 2019 se firma un Convenio AyA-SINIRUBE, con el fin de iniciar un trabajo de coordinación entre el AyA y el Instituto Mixto de Ayuda Social, para iniciar la selección y clasificación de usuarios del servicio de AyA, que sean potenciales beneficiarios de un Subsidio, según lo establecido en los Decretos Ejecutivos Nos. 39757MINAE y 40711-MINAE, que se han emitido para el establecimiento del Programa Nacional de Subsidios al Agua Potable y Servicios conexos, cuyo objetivo es proveer un consumo mínimo de agua potable a los usuarios en condición de pobreza y pobreza extrema.

A continuación, un extracto de los Decretos antes mencionados, directamente del Capítulo IV que habla del Acceso Universal a los Servicios.

|  |  |
| --- | --- |
| **DECRETO EJECUTIVO Nº 39757 -MINAE, publicado en Gaceta No. 126, del 30 de junio 2016, Alcance 111** |  |

**MODIFICADO MEDIANTE DECRETO 40711-MINAE publicado en Gaceta 207 del 02 de noviembre 2017**

**En lo que nos interesan señalan**

# Capítulo IV Acceso Universal a los Servicios

**Artículo 9**.- El Estado debe procurar el acceso de la población, sin discriminación por la condición socioeconómica, a los servicios de agua potable y saneamiento, indispensables para la vida y salud de los habitantes del territorio nacional, procurando que los servicios se brinden con calidad, cantidad y continuidad, y que las aguas residuales sean recolectadas y tratadas en forma sanitariamente seguras.

**Artículo 10.-** Se dispondrá de un sistema nacional de subsidios cruzados focalizados al suministro de agua potable y servicios conexos, así como al servicio de saneamiento, para garantizar el acceso a estos servicios, a los usuarios en condición de pobreza y pobreza extrema, el cual será financiado a través de la estructura tarifaria de los operadores, con el aporte de los usuarios que no sean clasificados en condición de pobreza y pobreza extrema, por las instancias del Estado responsables de las políticas y programas sociales, para la mitigación de la pobreza.

**Artículo 11.-** MODIFICADO DECRETO 40711-MINAE

**Artículo 11.-** El denominado: “Sistema Nacional de Subsidios Focalizados, al Consumo de Agua Potable y Saneamiento”, deberá cumplir con los siguientes criterios básicos:

La Autoridad Reguladora garantizará la recuperación de los costos relacionados con el beneficio y el equilibrio financiero del prestador en los términos establecidos en el artículo 3, inciso b) de la Ley N° 7593 del 9 de agosto de 1996.

El consumo de los usuarios beneficiarios debe ser medido desde el primer metro cúbico consumido siempre que los elementos técnicos lo permitan.

Hasta un máximo de consumo de quince metros cúbicos por abonado el subsidio será de cien por ciento (100%) para la población en condiciones de pobreza extrema y de cincuenta por ciento (50%) para la población en condiciones de pobreza básica. El exceso del consumo por encima del nivel máximo subsidiado, deberá ser pagado por el abonado beneficiado con el subsidio, de acuerdo a las tarifas plenas vigentes.

El Poder Ejecutivo revisará periódicamente el nivel máximo de consumo utilizando para ello los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS-OPS) y los criterios técnicos del sector, de manera que se cubran las necesidades básicas y se minimicen los riesgos de salud asociados a los servicios de agua potable y saneamiento.

Los criterios de elegibilidad de los potenciales beneficiarios, deben ser técnica y claramente definidos, por las instancias del Estado responsables de las políticas y programas sociales, de mitigación de la pobreza, como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

El sistema de subsidios cruzados focalizados será financiado por los usuarios que no sean clasificados en condición de pobreza y pobreza extrema, atendiendo a los principios que sustentan y fundamentan el ejercicio de las potestades tarifaria y regulatoria de ARESEP, contenidos tanto en la Ley N° 7593, como en el artículo 4 de este Decreto.

Deberá quedar explícitamente mostrado en la facturación de los servicios prestados, el monto del subsidio al suministro de agua potable y saneamiento, que reciban los usuarios beneficiarios, de igual forma debe mostrarse el recargo sobre la tarifa de los servicios que pagan los usuarios contribuyentes, con el fin de que exista transparencia y claridad en el financiamiento del subsidio cruzado focalizado.

**Artículo 12.-** El Instituto Mixto de Ayuda Social, será la instancia del Estado responsable de establecer los criterios técnicos de selección y valoración de los beneficiarios del subsidio al agua potable y saneamiento, así como coordinar con los operadores los procesos de identificación y seguimiento de los usuarios que por su condición de pobreza y pobreza extrema, requieran del subsidio focalizado.

# Artículo 13.- DEROGADO

**Artículo 14.-** El Instituto Mixto de Ayuda Social, el Instituto de Estadística y Censos y los Operadores de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento, deberán establecer convenios de cooperación mutua que les facilite el apoyo logístico, financiero y de recurso humano, para realizar la coordinación de las actividades necesarias para la: identificación, selección, valoración y seguimiento, de los usuarios en condición de pobreza y pobreza extrema.

**Artículo 15.**- MODIFICADO DECRETO 40711-MINAE

**Artículo 15.-** El subsidio al consumo de agua potable y saneamiento, se mantendrá vigente, a favor del beneficiario, siempre y cuando éste se mantenga bajo la condición de pobreza extrema o pobreza básica, según criterio técnico de las instancias del Estado responsables de las políticas y programas sociales, de mitigación de la pobreza como el IMAS; y para conservarlo los usuarios beneficiarios deberán someterse durante el período de vigencia, al menos cada dos años a una revisión y actualización de sus datos, consignados en la Ficha de Información Social (FIS) e incorporados en el Sistema Nacional de Registro Único de Beneficiarios (S1NURIBE).

En caso de que se cancele el beneficio por causa de una decisión técnica de las Instituciones competentes de la selección de beneficiarios, el usuario podrá renovar el subsidio mediante la respectiva evaluación y valoración de campo, que permita la actualización de la ficha FIS y la verificación de las condiciones de elegibilidad, estipuladas por el IMAS o por la instancia que este ente autorice para dichos efectos.

Artículo 16.- MODIFICADO DECRETO 40711-MINAE

**Artículo 16.-** La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos tendrá la responsabilidad de incorporar en las metodologías para la fijación de las tarifas del sector de agua y saneamiento, las disposiciones de la presente política sectorial, con el objetivo de establecer una asignación eficiente de las tarifas entre los distintos tipos de usuarios, que incluya una diferenciación, para asegurar el acceso a los estratos de la población en condición de pobreza básica y pobreza extrema.

Aplicando para estos efectos un proceso gradual de modificación de las estructuras tarifarias, de manera que se eliminen los subsidios generales y se implemente un sistema de subsidios focalizados para los usuarios clasificados en condición de pobreza básica y pobreza extrema, asegurando de esta forma la sostenibilidad y equilibrio financiero de los operadores, así como el desarrollo de los sistemas de agua potable y saneamiento”.

Pregunta(s):

1. Durante la última década (2010-2020), ¿qué medidas se han adoptado para prohibir la desconexión (incluidos los contadores de agua de prepago) causada por la incapacidad de pago?

R/ De conformidad con el artículo 12 de la Ley General de Agua Potable No.1634, artículo 4 de la Ley Préstamo BCIE para II Etapa Acueducto Metropolitano y Otras Obras No.5595, del 17 de octubre de 1974, las deudas provenientes por el servicio de cañerías y alcantarillado sanitario imponen Hipoteca Legal sobre el bien inmueble en que recae la obligación de pagarlo. Por su parte, el artículo 13 de la misma Ley No.1634, dispone que todo atraso en el pago de los servicios de Agua Potable, tendrá una multa del 2% mensual sobre el monto de la deuda, cuyo tope de un 20% como máximo, se encuentra establecido en el Acuerdo de Junta Directiva AN-2001-279 de 12 de setiembre del 2001.

El principio general de no gratuidad de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento se detalla de forma concreta en el 8 del Reglamento para la prestación de los servicios de AyA, el cual, a la literalidad establece que; los servicios prestados para todos sus usuarios, por ley no podrán ser gratuitos, así se trate de entidades públicas nacionales, regionales, municipales u otros operadores.

Bajo dicha premisa, y contrario a lo requerido en este ítem en específico, el artículo 76 del Reglamento Técnico de ARESEP, y 87 del Reglamento para la prestación de los servicios de AyA, habilitan suspender el suministro de agua, entre otras causas, por la falta de pago del servicio, posterior al cumplimiento de la fecha de cancelación de la factura, siempre y cuando en la facturación entregada o dispuesta al abonado en el lugar o medio señalado, se indique la fecha de vencimiento. Posterior a ello, la suspensión se hará efectiva antes de la siguiente facturación, en caso de subsistir el incumplimiento de pago.

La propia Sala Constitucional, ha reconocido la facultad de los operadores del servicio público de agua potable para proceder con la suspensión de aquellos servicios que registran morosidad por falta de pago de la última factura emitida y vencida, siempre y cuando se garantice el acceso al abastecimiento por medio de la fuente pública que se describe en los artículos 28 del Reglamento Técnico de ARESEP y 90 del Reglamento para la prestación de los servicios de AyA para servicios facturados en tarifa domiciliar, y para lo cual cabe citar entre otras, la **Resolución No. 2007006102, Resolución No. 2006-012111, así como Resolución No. 2010012484**, **Resolución Nº2019005748,** entre otras.

Sin embargo, los artículos 41 del Reglamento Técnico de ARESEP y 89 del Reglamento para la prestación de los servicios de AyA, determinan la improcedencia para suspender el servicio de alcantarillado sanitario y saneamiento por la falta de pago de la factura respectiva, a lo cual se agrega en el artículo 78 del mismo Reglamento de ARESEP, las condiciones para no suspender el servicio de acueducto por falta de pago, entre ellas; a) El abonado esté al día con la última facturación; b) El abonado esté al día con la última facturación aunque tenga facturaciones anteriores pendientes de pago; c) El abonado demuestre a la cuadrilla de corta que ha cancelado la factura, aún en fecha posterior al vencimiento; y d) Sea viernes, sábado, domingo o día anterior a un feriado, salvo si al día siguiente el prestador tiene habilitado el servicio de recaudación y reconexión.

Por último y en adición a lo expuesto en el párrafo anterior, es importante informar, que AyA procedió a comunicar por medio de los diferentes medios de prensa nacional, la entrada en vigor de la DIRECTRIZ N°GG-2020-01225, emitida por la Gerencia General de AyA, la cual contempla las medidas para la Gestión Comercial en AyA a Nivel Nacional, referentes a la Directriz No. 076-S, dictada por el Gobierno de la República para el suministro de agua potable ante la alerta sanitaria del COVID-19. Con ocasión de lo anterior, la DIRECTRIZ N°GG-2020-01225, instruye a las jefaturas de Servicio al Cliente del AyA a nivel nacional y demás áreas correspondientes a cumplir de manera obligatoria, entre otras, las siguientes disposiciones:

* La facturación se realizará en forma estimada, a partir del 20 de marzo de 2020 y hasta nuevo aviso.
* A partir del 20 de marzo del año en curso y hasta nuevo aviso, no se suspenderán servicios de agua por morosidad.
* Se habilita la formalización de arreglos de pago para reestablecer los servicios suspendidos, con el objetivo de prevenir el contagio del virus COVID-19, debido al estado de emergencia nacional declarado mediante el Decreto Ejecutivo número 42227- MP-S del 16 de marzo de 2020.

Lo anterior, considerando que en ningún caso se entenderán como la suspensión de la obligación de pago del servicio ni la condonación de las deudas que tengan los usuarios con AyA. Se reitera que dicha medida se promueve exclusivamente con el fin de que se mantenga el suministro de agua potable para mitigar la emergencia sanitaria por el virus COVID-19, mediante un aplazamiento del pago del servicio por parte de los usuarios. Se mantendrá la reconexión para todo servicio que normaliza su cuenta con AyA.

# Reglamentación del servicio (2017) [(A/HRC/36/45)](http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/36/45&Lang=E)

La reglamentación es una parte esencial de las obligaciones en materia de derechos humanos. En el sector del agua y el saneamiento, la reglamentación de los servicios puede contribuir a la realización progresiva de los derechos humanos al agua y el saneamiento. Si bien las normas internacionales de derechos humanos no exigen una elección particular de marco regulador, lo que es esencial desde la perspectiva de los derechos humanos es que quienes desempeñan funciones reguladoras sean inmunes a las presiones de cualquier interés ilegítimo y que los objetivos de la regulación se ajusten al marco de derechos humanos. Una de las funciones fundamentales de la reglamentación es establecer normas de rendimiento desde la perspectiva de los derechos humanos, en contraposición a la perspectiva económica. Independientemente del órgano que desempeñe las funciones de regulación, esas normas deben reflejar y dar un significado práctico al contenido normativo de los derechos humanos al agua y el saneamiento en lo que respecta a la suficiencia, la salubridad y aceptabilidad, la asequibilidad y la accesibilidad, la intimidad y la dignidad.

Pregunta(s):

1. En el último decenio (2010-2020), en caso de que se haya establecido o creado un marco reglamentario o un órgano regulador para el suministro de agua y saneamiento, ¿qué medidas se han adoptado para garantizar que ese órgano sea eficaz e independiente y se ajuste al marco de derechos humanos?

R/ Según se indicó en el ítem 1, el ordenamiento jurídico costarricense, promulgó la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos N°7593, con el objetivo de armonizar los intereses de los consumidores, usuarios y prestatarios de los servicios públicos, procurar el equilibrio entre las necesidades de los usuarios y los intereses de los prestatarios de los servicios públicos, asegurar que los servicios públicos se brinden al costo, formular y velar porque se cumplan los requisitos de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarios para prestar en forma óptima, los servicios públicos sujetos a su autoridad, coadyuvar con los entes del Estado, competentes en la protección del ambiente, cuando se trate de la prestación de los servicios regulados o del otorgamiento de concesiones y ejercer la regulación de los servicios públicos.

Dentro de las funciones que otorga el artículo 5 de la Ley N°7593, corresponde a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos; fijar precios y tarifas de los servicios públicos, además, velará por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima de los servicios, entre ellos, el suministro del servicio de acueducto y alcantarillado, incluyendo agua potable, recolección, tratamiento y evacuación de aguas negras, aguas residuales y pluviales.

Por su parte, el artículo 6 de la misma Ley N°7593, detalla, que es obligación de ARESEP; a) Regular y fiscalizar contable, financiera y técnicamente, a los prestatarios de servicios públicos, para comprobar el correcto manejo de los factores que afectan el costo del servicio, ya sean las inversiones realizadas, el endeudamiento en que han incurrido, los niveles de ingresos percibidos, los costos y gastos efectuados o los ingresos percibidos y la rentabilidad o utilidad obtenida., b) Realizar inspecciones técnicas de las propiedades, plantas y equipos destinados a prestar el servicio público, cuando lo estime conveniente para verificar la calidad, confiabilidad, continuidad, los costos, precios y las tarifas del servicio público., c) Velar por el cumplimiento, por parte de las empresas reguladas, de las obligaciones en materia tributaria, el pago de las cargas sociales, y el cumplimiento de las leyes laborales., d) Cualquiera otra obligación que las leyes le asignen.

No obstante, de acuerdo con los alcances de la Ley N°2726, es ajeno a las competencias del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, verificar cuales son las medidas se han adoptado para garantizar que ese órgano sea eficaz e independiente y se ajuste al marco de derechos humanos, toda vez que es la AyA, quien se encuentran regulado por dicha entidad estatal.

En cuanto al marco reglamentario, el artículo 25 de la Ley N°7593, faculta a la ARESEP, para regular de forma general a todos los operados de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento por medio del Reglamento Técnico: Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes ARPSAYA-2013 y su Reforma AR-PSAYA-2015, el cual dispone en su artículos 2 y 3; que el mismo es aplicable a los servicios públicos de acueducto, alcantarillado sanitario e hidrantes en cuanto a: operación, mantenimiento, desarrollo y administración de estos servicios, en sus diferentes etapas, siendo su alcance, de aplicación a nivel nacional, para los prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado sanitario e hidrantes regulados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Además, el artículo 128 del mismo Reglamento Técnico de ARESEP, contiene la obligación de observancia al principio de legalidad y jerarquía normativa, por lo que en caso de que alguna disposición emitida por los prestadores se contraponga a este Reglamento, el prestador deberá aplicar lo aquí dispuesto.

Por su parte, los artículos 5 inciso j) y 11 inciso i) de la Ley N°2726, facultan a AyA, a dictar sus propios Reglamentos autónomos, entre ellos; el Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, vigente desde el 19 de diciembre de 2019, y que establece en el artículo 2, que el mismo es aplicable a los servicios públicos de abastecimiento de agua para uso poblacional y saneamiento de aguas residuales en cuanto a la disponibilidad y prestación efectiva de los servicios. Por su parte, el artículo 3, establece que el alcance del Reglamento se aplica a nivel nacional para todos aquellos usuarios que estén dentro de la zona de cobertura de los sistemas de abastecimiento de agua para uso poblacional y saneamiento de aguas residuales del AyA; así como para aquellos sistemas delegados por AyA en cuanto sea materialmente posible su aplicación. Asimismo, podrá ser utilizado de forma supletoria por otros operadores.

Corolario de las consideraciones realizadas, se tiene que en Costa Rica existe un órgano de desconcentración máxima denominado: Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aserep), según consta en la Ley N°7593 en el Capítulo I de Constitución y Artículo 1 “Transformación” el cual se trascribe a continuación:

Artículo 1.- Transformación

Se transforma el Servicio Nacional de Electricidad en una institución autónoma, denominada Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, en adelante y para efectos de esta ley llamada Autoridad Reguladora.

La Autoridad Reguladora tendrá personería jurídica y patrimonio propios, así como autonomía técnica y administrativa. Se regirá por las disposiciones establecidas en esta ley, sus reglamentos y las leyes que la complementen.

La Autoridad Reguladora no se sujetará a los lineamientos del Poder Ejecutivo en el cumplimiento de las atribuciones que se le otorgan en esta ley.

Las funciones de dicho órgano están plasmadas en el artículo 5 de la misma ley y cita de la siguiente manera:

**ARTÍCULO 5.-** **Funciones**

En los servicios públicos definidos en este artículo, la Autoridad Reguladora fijará precios y tarifas; además, velará por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima, según el artículo 25 de esta ley. Los servicios públicos antes mencionados son:

c) Suministro del servicio de acueducto y alcantarillado, incluyendo agua potable, recolección, tratamiento y evacuación de aguas negras, aguas residuales y pluviales.

Por lo anterior y tal como se puede observar el Ente Regulador para los servicios públicos de agua potable y saneamiento es la Aresep.

# Personas desplazadas por la fuerza (2018) ([A/HRC/39/55](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Water/A_HRC_39_55_EN.DOCX))

Las personas desplazadas por la fuerza -en particular personas desplazadas internas, personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes en situación vulnerable, mientras se encuentran en ruta, en las fronteras, en la recepción y en el lugar de destino- sufren de un acceso inadecuado al agua y el saneamiento, a pesar de la amplia atención internacional prestada a un reciente aumento de los desplazamientos. Algunas son olvidadas en situaciones prolongadas y a menudo no reciben lo que necesitan desesperadamente, por lo general porque no se les consulta debidamente. A veces, las víctimas de desplazamiento forzoso se benefician de una asistencia "vital" que los agentes humanitarios ponen rápidamente en práctica, pero con frecuencia esa asistencia no establece un plazo para avanzar hacia la realización progresiva de sus derechos. Las personas desplazadas por la fuerza son titulares de derechos y, por lo tanto, tienen derecho a disfrutar del acceso a servicios adecuados de agua potable y saneamiento; no son meros receptores de ayudas. Los países receptores no pueden justificar las restricciones al disfrute del contenido esencial de los derechos económicos, sociales y culturales basándose en la falta de recursos. Los Estados no tienen justificación para proporcionar a las personas desplazadas por la fuerza servicios de agua y saneamiento deficientes como medio para restringir su entrada en el territorio o como medio para disuadir a las personas de permanecer en él.

Pregunta(s):

1. Durante el último decenio (2010-2020) ¿qué medidas se han adoptado para garantizar los derechos humanos al agua y el saneamiento de las personas refugiadas, las personas solicitantes de asilo y las personas migrantes en tránsito o en su lugar de destino en las mismas condiciones que las concedidas a los nacionales de los Estados interesados, independientemente de su condición jurídica y su documentación?

En Costa Rica, a pesar de que a nivel constitucional no se cita expresamente el Derecho Humano al agua y al saneamiento, existe al menos el Decreto 30480-MINAE  ( publicado en el diario oficial La Gaceta del 12 de junio del 2002) , que contiene los principios que rigen la Política Nacional Hídrica, el cual establece en su primer artículo “El acceso al agua potable constituye un derecho humano inalienable y debe garantizarse constitucionalmente”.

A nivel jurisprudencial, la Sala Constitucional en sus sentencias ha desarrollado que el agua es un derecho fundamental derivado del derecho a la vida y a la salud. ( Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, San José, res n. 2009-9041, a las 10:30 del 29 de mayo del 2009. a. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, San José, res n. 2007-11430, a las 11:03 del 10 de agosto del 2007. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, San José, res n. 2009-2019, a las 14:55 del 11 de febrero del 2009. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, San José, res n. 2007-5894, a las 11:58 del 27 de abril del 2007).

En la Asamblea Legislativa, el último proyecto de Ley, con el objeto de introducir este derecho al agua y al saneamiento, es el 17.742, y 21.382 , en el caso de este último El Congreso aprobó en segundo y definitivo debate la reforma constitucional para Reconocer y Garantizar el Derecho Humano de Acceso al Agua (expediente 21.382).

Dicha reforma agrega un párrafo al Artículo 50 de la Constitución, el cual reza:

*Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la Nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos, y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.*

El expediente recibió el visto bueno de la Sala Constitucional y requerirá de tres debates adicionales durante la segunda legislatura del 2020.

**Derecho a una buena calidad y nivel de vida adecuado**

El AyA anualmente diseña un plan de atención que involucra a los pueblos indígenas para la realización de las viabilidades socioculturales, técnicas, legales, organizativas, económicas y ambientales para el diseño de proyectos, la construcción de estos y su gestión integral. En este plan anual se definen los sistemas que serán prioritarios a diseñar, a construir y brindar capacitación y seguimiento a los entes operadores comunitarios definidos por los pueblos indígenas para la administración de sus sistemas de agua potable.

En los últimos 5 años se han concluido 18 acueductos en territorios indígenas, con una inversión de (₡1.760 millones para 10.000 personas. Para el año 2020 se proyecta la construcción de 13 acueductos para comunidades indígenas en 7 de sus territorios, con una inversión de (₡ 1.228 millones. Los proyectos beneficiarán a 3.300 personas en los territorios de Telire (4 acueductos). Punta Burica (3), Salitre (2), Bribri de Talamanca, Tayní. Térraba y Zapatón. Igualmente, la institución gestiona la construcción de acueductos en las comunidades indígenas de Quilirrisí, Rey Curré y Nairi Awari. Además, se proporciona agua potable mediante camión cisterna a más de 6 comunidades indígenas.

**Derecho a un medio ambiente de calidad y a la territorialidad**

Las viabilidades que contempla el AyA incluyen los aspectos socioculturales, legales y ambientales. En este sentido, el recurso hídrico revierte especial atención, de manera que en las acciones consultivas se expone el tema ambienta! y territorial. Para la ejecución de los proyectos es fundamental contemplar la dimensión territorial y con base en esta, la normativa sociocultural que impera con los pueblos indígenas para la construcción de proyectos y la gestión integral de los acueductos, la cual implica administración del acueducto, operación de este y gestión integrada del recurso de hídrico.

La administración de los recursos naturales en los territorios indígenas es materia clave en la normativa internacional vinculante con estas poblaciones por su implicación directa con la gobernabilidad territorial por parte de estos pueblos. Por ende, AyA en los procedimientos en construcción para gestión de calidad institucional, contempla estos aspectos, los cuales actualmente se aplican, y serán reforzados con los resultados del diagnóstico supracitado.

La población que abarca el área de influencia directa (AID) del PAAM, se conforma por una variedad étnica producto de la cultura mestiza con mayoría en el país y de las oleadas de migrantes provenientes de diversos lugares. La población migrante en Costa Rica se ve atraída por la concentración de fuentes de trabajo en el Valle Central. Las proyecciones de población del Proyecto de Abastecimiento del Acueducto Metropolitano se realizaron tomando en cuenta este contexto, de concentración de población migrante en el valle central y las necesidades de los conglomerados empresariales e industriales que se ubican en esta zona. Desde el Proyecto, se ha dado prioridad a zonas en la que prevalecen las situaciones de desabastecimiento o programas de racionamiento y se aborda el problema de la gran cantidad de solicitudes de disponibilidad de agua para nuevos desarrollos y crecimiento vegetativo de la población.

**Megaproyectos (2019) (**[**A/74/197)**](http://undocs.org/A/74/197)

Los megaproyectos tienen un doble impacto: pueden contribuir a mejorar los medios de vida de las personas, pero también pueden impedir el disfrute de los derechos humanos al agua y el saneamiento. A fin de prevenir y mitigar los riesgos derivados de esos proyectos y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, el Relator Especial presenta un marco del ciclo de los megaproyectos para la realización de los derechos humanos al agua y el saneamiento, que consta de siete etapas, cada una de las cuales tiene repercusiones en el acceso al agua y el saneamiento, en los problemas y los factores facilitadores para la realización de los derechos humanos al agua y el saneamiento. Aclara cada una de las etapas del ciclo del megaproyecto y proporciona una lista de preguntas que constituyen directrices para que los agentes responsables cumplan sus obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos.

Pregunta(s):

1. Durante el último decenio (2010-2020), ¿cómo han asegurado los Estados y los agentes humanitarios el acceso inmediato al nivel mínimo esencial de agua y saneamiento de forma no discriminatoria durante las situaciones de emergencia? Concretamente, los Estados y los agentes humanitarios, ¿cómo han:
2. Asegurado la igualdad de acceso a la cantidad mínima esencial de agua que es suficiente y segura para los usos personales y domésticos y para prevenir enfermedades?
3. Proporcionado los elementos que toda persona necesita para la salud y la supervivencia, y para vivir con dignidad?
4. Monitoreado el grado de realización de los derechos humanos al agua y el saneamiento?
5. Tomado medidas para prevenir, tratar y controlar las enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento?

R/ La respuesta se basa igualmente a la contestación dada en la pregunta 7 anterior, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) construirá durante el 2020, 13 acueductos para comunidades indígenas en 7 de sus territorios, para lo que la institución invierte 1.228 millones de colones a efectos de garantizar el acceso al agua potable a esos pobladores.

Los proyectos beneficiarán a 3.300 personas en los territorios de Telire (4 acueductos), Punta Burica (3), Salitre (2), Bribri de Talamanca, Tayní, Térraba y Zapatón.

La inversión en agua potable para los pueblos indígenas es una de las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los objetivos institucionales. En los últimos 5 años, hemos concluido 18 acueductos por 1.760 millones de colones para el beneficio de más de 10.000 personas.

Durante el 2019, se inauguraron proyectos en !os territorios indígenas de Punta Burica, cerca de la frontera con Panamá, y Malecu en la zona norte.

La cartera de inversiones en comunidades indígenas se financia con el apoyo del Fondo de Asignaciones Familiares (Fodesaf), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Cooperación Española, y recursos propios AyA.

**Interculturalidad**

La ejecución de muchos de estos proyectos se dificulta por la dispersión de sus habitantes, la topografía y las dificultades de acceso. Por ejemplo, en las comunidades cabecares de Alto Bley y Bekbatá, en Telire de Talamanca, donde habitan 110 personas, la construcción implica trasladar tanques, tubería, accesorios y funcionarios en varios viajes de helicóptero de hasta media hora.

En estos proyectos los funcionarios se acompañan de indígenas interpretes español-cabécar para cumplir con el proceso de información y consulta que exigen los convenios internacionales en esta materia, considerando sus condiciones socioculturales, educativas, generacionales y de género.

Igualmente, la institución gestiona la construcción de acueductos en las comunidades indígenas de Quitirrisí, Rey Curré y Nairi Awari. Además, se proporciona agua potable mediante camión cisterna a más de 6 comunidades indígenas.

**Procesos consultivos**

Para el desarrollo de las distintas obras, el AyA promueve procesos consultivos continuos con enfoque intercultural durante todo el ciclo de los proyectos con las poblaciones indígenas (preconstrucción, construcción y manejo de acueductos).

Impulsamos un cambio de paradigma en la gestión de proyectos para los pueblos y territorios indígenas, donde se contemplen los derechos culturales y el respeto a la legislación internacional y nacional en esta materia, lo cual es posible también gracias a la articulación con otras instituciones y ministerios.

El AyA respeta en los procesos consultivos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Mecanismo General de Consulta de 2018.

Como complemento a las obras a construir, durante 2020 la institución llevará a cabo un diagnóstico de las condiciones de abastecimiento de agua potable y saneamiento de los 24 territorios indígenas, a la vez, que está trabajando en el "Programa de atención institucional a pueblos y territorios indígenas".

Actualmente, existen más de 50 acueductos en estos territorios, a los que se procura dar acompañamiento en su gestión.



Lo anterior se amplía en el Informe Atención a Comunidades Indígenas, que se adjunta a la presente.

Finalmente, es importante indicar que el Consejo Gerencial del AyA, aprobó en octubre de 2019, la propuesta del Laboratorio Nacional de Agua, de ejecutar el Programa Nacional de Disminución de brechas en el acceso agua potable: 2019-2023 y 2024-2030. Con respecto, al saneamiento de aguas residuales, se debe establecer un proyecto semejante. Por último, es fundamental establecer un programa de higiene sostenible, para prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas como el SARS-COV-2, otras enfermedades respiratorias y diarreicas.

**Principio de rendición de cuentas (2018)** ([A/73/162](http://undocs.org/A/73/162))

La complejidad de los agentes del sector del agua y el saneamiento y sus especificidades implican que el marco tradicional de derechos humanos, centrado en el Estado, no sea adecuado por sí solo para los mecanismos de rendición de cuentas dirigidos a agentes no-estatales. Cuando los derechos al agua y el saneamiento se ven afectados, no siempre está claro a quién se pueden atribuir las medidas que se han tomado, por qué se han adoptado, cómo se pueden aplicar las sanciones contra quienes han causado daños, o cómo remediar la situación. Además, la globalización y la ola neoliberal han debilitado el papel del Estado en el suministro y la regulación de los servicios de agua y saneamiento, y el desequilibrio de poder ha afectado en ocasiones al ejercicio de los derechos humanos al agua y el saneamiento. Esto plantea interrogantes en cuanto a la reglamentación efectiva de los proveedores de servicios privados y, a su vez, plantea problemas a los mecanismos de rendición de cuentas, especialmente si se tiene en cuenta que esos servicios se prestan por medio de un sistema de monopolio natural, en el que por lo general hay un solo proveedor para un territorio determinado. Otra característica singular del sector del agua y el saneamiento es la presencia generalizada de proveedores de servicios informales que no están regulados y operan sin licencia, y a los que, por consiguiente, no resulta fácil obligar a rendir cuentas. En este contexto, el Relator Especial aborda el concepto de rendición de cuentas a través de tres dimensiones, a saber, las funciones y la responsabilidad de los agentes, la rendición de cuentas y la exigibilidad.

**Pregunta(s):**

1. En el último decenio (2010-2020), ¿qué medidas de rendición de cuentas existen cuando las responsabilidades de la prestación de servicios se transfieren del Estado a agentes no-estatales (entidades privadas, empresas públicas y comunidades)? Sírvase proporcionar información sobre las tres dimensiones de la rendición de cuentas: funciones y responsabilidad claras de los agentes; garantía de que los particulares hagan responsables a los agentes solicitando explicaciones e información ("responsabilidad"); y medidas correctivas o de enmienda por el incumplimiento de las normas de rendimiento ("obligatoriedad").

R/ Un ejemplo de la transferencia de responsabilidad del estado a agentes no estatales es el caso de la delegación del servicio de acueducto en manos de Asadas.

**Pregunta(s):**

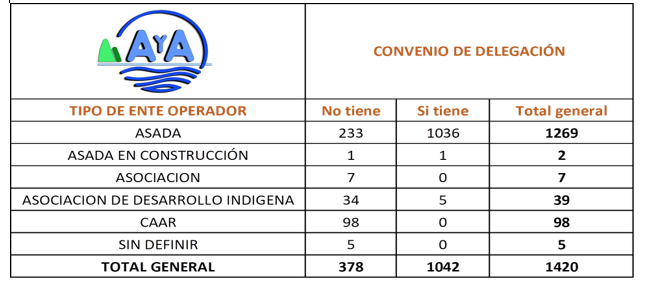
1. En el último decenio (2010-2020), ¿qué medidas se han adoptado para identificar a los proveedores informales de servicios de agua y saneamiento y establecer reglamentos para esos proveedores, poniendo a su disposición mecanismos de rendición de cuentas?

R/ Como medidas el AyA ha coordinado con la Dirección de Aguas y la Fiscalía Ambiental para la detección y denuncia de proveedores informales.

Los Convenios de Delegación inicia como figura con el Reglamento de ASADAS del 2020. La mayor parte de las ASADAS se conformaron entre los años 80’ al 2010. El Convenio de Delegación fue considerado por algunas ASADAS con cierto temor, pues lo vieron como una amenaza ante los acueductos comunales que consideraban como propios.

Actualmente hay 1422 entes operadores comunitarios, de los cuales 1422 son ASADAS y 127 entes operadores comunitarios que son comités u otras figuras, pero que no se han conformado como organización bajo la Ley 218.

Es importante resaltar que la institución por primera vez realizó un diagnostico nacional de ASADAS entre 2018 y 2019, tipo censo, que permitió identificar el número real de ASADAS, su caracterización y por supuesto las ASADAS con o sin convenio de Delegación. Las cuales también han sido verificadas por nuestra Dirección Jurídica. De manera que es reciente que la institución cuenta realmente con un dato preciso al respecto, el cual se actualiza en el sistema SAGA. El resultado es que del total de 1420 entes operadores comunitarios, un 73% (1042) cuenta con Convenio de Delegación. Es importante anotar que entre los entes operadores comunitarios no todos son ASADAS, es decir las organizaciones que tienen personería jurídica y se conforman como tal bajo la Ley 218, como se desglosa en el siguiente cuadro:



De manera que en el sentido más riguroso, dado que solo las ASADAS cumplen con condiciones legales para firmar el convenio de delegación, se debe anotar que los datos cambiarían si consideramos solo las ASADAS, pues en total son 1269 ASADAS, de las cuales, un 81.64% (1036) cuentan con convenio.

Las acciones que se han desarrollado para posicionar el Convenio de Delegación como la figura legal que autoriza a las ASADAS a prestar el servicio de agua potable y saneamiento, han sido las siguientes:

1. Desde las ORAC de la Subgerencia de Sistemas Delegados, es decir las oficinas regionales de atención de ASADAS, se ha promovido la firma de convenios. Uno de los indicadores de gestión de las ASADAS que las ORAC deben promover y facilitar a través de la asesoría técnica es el cumplimiento del Indicador de Calidad Prestación del Servicio Delegado, en este se incluye contar con el Convenio de Delegación. De manera que es un trabajo de oficio de las ORAC´s.
2. Esa labor realizada por las ORAC´s, se refleja en los 503 convenios firmados en los últimos 10 años de un total de 1269 ASADAS. Y se consideran los últimos 5 años se han firmado 155 convenios. Se debe considerar los que faltan por firmar son los más difíciles, porque son quienes se han opuesto o tienen la información necesaria para tomar la decisión.
3. Algunas regiones como el caso de Huetar Norte, donde las cooperativas han presionado para prestar el servicio en lugar de las ASADAS, se realizó durante el 2018 desde la Subgerencia de Sistemas Comunales, un proceso de negociación y concientización con la ASADA La Fortuna que finalizó con la firma del convenio en el 2019. Esta ASADA había hecho una resistencia “histórica” a contar con el Convenio de Delegación. Por su parte es una de las más emblemáticas de la zona, tanto por su tamaño como por su capacidad de gestión, pues da el servicio a una de las zonas con mayor visitación turística del país (Volcán Arenal). Esa acción provocó que otras tres ASADAS cercanas hayan firmado el convenio.
4. Otra acción importante ha sido el llamado del AYA, en su condición rectora, a las municipalidades y otras instituciones públicas para que exijan como requisito contar con Convenio de Delegación para realizar trámites oficiales. El más relevante de estos es la necesidad de contar con el convenio para que las ASADAS pueda proporcionar disponibilidades de agua para nuevos usuarios o servicios. Solo con las disponibilidades aprobadas, las Municipalidades pueden otorgar el permiso de construcción. En ausencia de Convenio, los interesados deben solicitar la disponibilidad ante la Subgerencia de Sistemas Comunales a través de las ORAC. Todo este trámite, le quita competencias a las ASADAS y autonomía en su gestión, y ello ha provocado que aumente el número de ASADAS que solicitan firmar el convenio con AYA.
5. Así mismo, la institución ha solicitado a otros entes públicos para que no acepten trámites de ASADAS sin convenio, entiéndase préstamos con bancos, asesorías y fiscalizaciones de ARESEP y aprobación de estudios tarifarios, aprobación de caudales por parte de la Dirección de Aguas del MINAE, trámites ante Hacienda, entre otros.
6. Es importante considerar que el AYA no cuenta con el instrumental sancionatorio para exigirle a las ASADAS que firmen el convenio en su ley constitutiva. La relación de las ASADAS con el AYA, está definida en el Reglamento de ASADAS, y en este se norma por primera vez el Convenio de Delegación a partir del año 2002. Como es sabido, las medidas sancionatorias solo pueden establecerse por ley y no así por reglamento.
7. Sin embargo, considerando esa limitación señalada arriba, se ha incorporado en el nuevo reglamento, que está ya en proceso de firma para decreto, un conjunto de medidas para que las ASADAS que se conformen, se vean obligadas a firmar casi paralelamente el Convenio de Delegación.

Es importante para finalizar, recalcar que se está trabajando en el diseño de una estrategia para promover la firma de Convenios de Delegación en el marco del proceso de gobernanza del Gestión de Comunitaria del Agua y la promoción del reconocimiento de la rectoría del AYA, por parte de los entes operadores comunitarios.

**Pregunta(s):**

1. En el último decenio (2010-2020), ¿qué medidas se han adoptado para establecer un sistema de supervisión eficaz que permita seguir la conducta de los agentes del sector del agua y el saneamiento y evaluar si se cumplen las normas de rendimiento? ¿Qué mecanismos existen para hacer cumplir las decisiones de otros agentes responsables?

R/AyA en calidad de Rector del servicio de abastecimiento de agua potable y de saneamiento de aguas residuales (recolección y tratamiento para su disposición en un cuerpo receptor), ha emitido y actualizado la normativa técnica para el diseño y construcción de los sistemas con los que se brindan estos servicios; aplicable tanto a proyectos de iniciativa pública como privada que incorporen dichos sistemas para ser operados por un ente público, los cuales deben ser aprobados por AyA de previo a su construcción, cumpliendo con el Reglamento para el Trámite de Revisión de los Planos para la Construcción (Decretos Nº 36550-MP-MIVAH-S-MEIC y N° 38441-MP-MIVAH-S-MEIC-TUR y sus reformas).

Parte esencial de esta reglamentación, lo es la Norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial, aprobada por Acuerdo de Junta Directiva de AyA N° 2017-281.

Esta normativa técnica establece requisitos técnicos generales aplicables a los sistemas de abastecimiento de agua potable, de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales de tipo ordinario, considerando además los aportes por aguas de infiltración y aguas residuales tratadas de tipo especial. A través de estos requisitos se garantizan los parámetros o criterios técnicos tales como períodos de diseño, diámetros mínimos y características técnicas de los tubos y otros componentes accesorios, criterios para determinar la capacidad de almacenamiento y dotación de agua potable, criterios que inciden en el diseño de conductos circulares sometidos o no a presión, criterios que son determinantes para la optimización del funcionamiento de los sistemas y que condicionan el diseño y uso de bienes y servicios y de tecnologías que finalmente inciden en la operación, rendimiento y mantenimiento de las líneas de tubería, plantas de potabilización, plantas de tratamiento, sistemas de bombeo y demás componentes.

El AyA en cumplimiento de los Decretos Nº 36550-MP-MIVAH-S-MEIC y N° 38441-MP-MIVAH-S-MEIC-TUR y con base en la norma técnica, fiscaliza que todos los proyectos dentro del territorio nacional, cumplan con esta normativa y reglamentación técnica. Dichos decretos establecen el procedimiento a seguir y las instancias respectivas, cuando los desarrolladores o propietarios de los proyectos incumplen lo establecido, ello incluye a los operadores que brindan los servicios públicos y que actúan como receptores de los sistemas o propietarios de los mismos. A través de estos decretos, también hay participación de otros órganos del Estado, según su ámbito de competencia, como por ejemplo: Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente, Benemérito Cuerpos de Bomberos (servicio de hidrantes), etc..

Una vez construidos los sistemas y puestos en operación, la evaluación del servicio público tiene varios actores, a continuación se citan los que intervienen de forma directa en la fiscalización de los servicios según sus ámbitos de competencia:

1. **Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP):** le

corresponde la fijación tarifaria y de tasas aplicables a los servicios, así como la fiscalización de la eficiencia y calidad de esos servicios, para lo cual ha emitido reglamentación y normativa técnica, de cuya aplicación se exceptúan las Municipalidades (Gobiernos Locales), los cuales se rigen en materia tarifaria por lo que establece el Código Municipal y respecto al diseño y construcción de los sistemas se rigen por lo que establece el AyA.

1. **Ministerio de Salud:** de conformidad con la Ley General de Salud le corresponde todo lo relativo a la contaminación del agua y el control de entes generadores que vierten sus desechos líquidos en cuerpos receptores, para ello emite reglamentación técnica aplicable a la ubicación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, vertido y reuso de aguas residuales, disposición en el subsuelo de aguas residuales ordinarias y calidad del agua potable, la cual es la base para ejercer la fiscalización correspondiente. En relación con los entes operadores, el Ministerio de Salud lleva a cabo su propia fiscalización pero también activa procesos de intervención hacia los operadores, donde participa directamente el AyA y de cuyo resultado depende que el AyA asuma o no la prestación del servicio del operador municipal.
2. **Ministerio de Ambiente:** tiene incidencia en la aprobación o cancelación de las concesiones de agua para consumo humano y en la aprobación de los estudios de impacto ambiental de los proyectos que contemplan sistemas de abastecimiento de agua potable y de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales, respecto de lo cual ejerce fiscalización según la normativa que establezca. Así mismo, ha establecido procedimientos y plataformas tecnológicas para el recibo y atención de denuncias ambientales.
3. **Contraloría General de La República:** en esencia le corresponde la vigilancia de la Hacienda Pública y por ende fiscaliza entre otros, a todos los organismos que intervienen en la prestación de los servicios públicos para el abastecimiento de agua potable y recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales. Hacia los entes operadores de estos servicios ha estado aplicando una gestión fiscalizadora a través de “Auditorías Operativas”, que pueden incluir todos los ámbitos de la prestación del servicio público en agua potable y saneamiento de aguas residuales.

En relación a dar respuesta a la primera parte de la pregunta sobre seguimiento, podemos indicar que a nivel de país, el AyA desde el Laboratorio Nacional da seguimiento a la calidad de los servicios que brindan los distintos operadores del servicio, entre lo cual se considera la accesibilidad del servicio, calidad y cobertura.

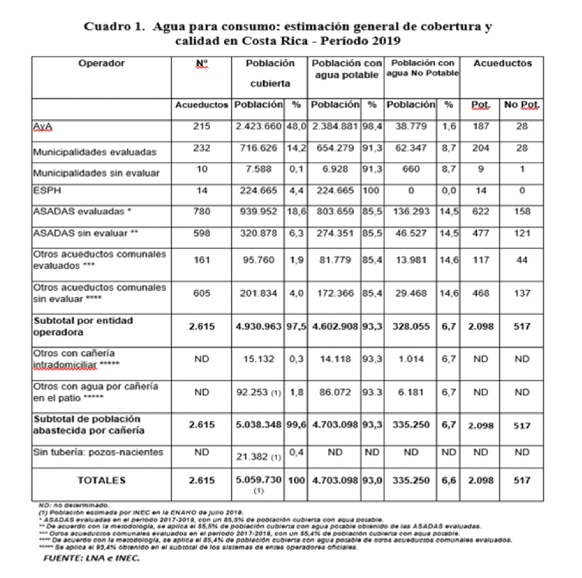
A continuación, se presenta un resumen de la información presentada en el Informe “Agua para consumo humano y saneamiento en Costa Rica al 2019: brechas y desafíos al 2023”, elaborado por el Dr. Darner Mora Alvarado y el Lic. Carlos Felipe Portugués Barquero, del Laboratorio Nacional de Aguas, con fecha febrero 2020, el cual tiene como objetivo “Estimar la situación de cobertura y calidad del agua para uso y consumo humano y saneamiento en Costa Rica al año 2019, con base en los nuevos conceptos proporcionados por el Programa Conjunto de Monitoreo de la UNICEF/OPS, con un enfoque dirigido a la identificación de las desigualdades entre la población nacional en la prestación de estos servicios”

**Abastecimiento de Agua para uso y consumo humano.**

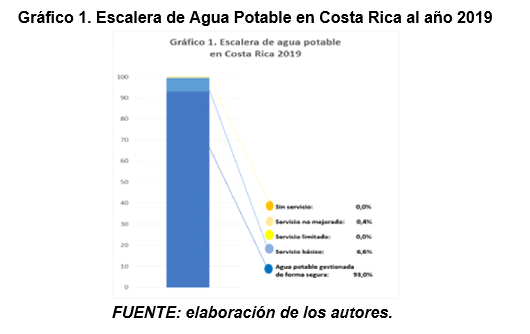
Costa Rica, con 5.059.730 habitantes, se mantiene a la vanguardia a nivel mundial en el abastecimiento de agua para uso y consumo humano, con un 97,8% de población cubierta con agua intradomiciliar (4.946.095 habitantes) y un 93,0% (4.703.0989 habitantes) con agua gestionada de forma segura; no obstante, el 1,8% de la población (92.253 habitantes) recibe servicio con tubería en el patio, y aún persiste un 0,4% (21.382 habitantes) que no tienen servicio y se abastecen directamente de pozos y nacientes artesanales.

# Cobertura y calidad del agua suministrada por entes operadoras

En el cuadro 1 se presenta la estimación nacional de cobertura y calidad del AUCH, según ente operador.



Tomando como base los datos de la estimación de cobertura y calidad del AUCH descritos anteriormente, se presenta el gráfico 1 con los resultados mediante la aplicación de la “Escalera del Agua Potable”, según OMS/UNICEF y adoptada por el LNA.

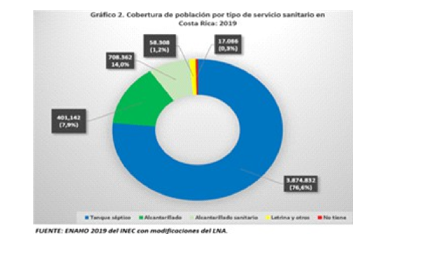


# Cobertura del Servicio de Saneamiento

Los resultados en cuanto al saneamiento no son tan halagüeños, pues continúa prevaleciendo el uso de tanque séptico sobre el alcantarillado, con un 76,6% y 21,9% respectivamente, y aún se cuenta con 17.086 personas que defecan a cielo abierto, para un 0,3% de la población del país

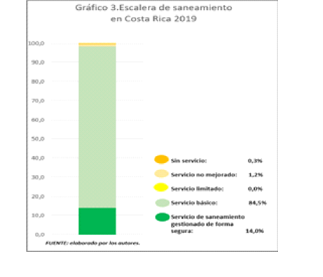
# Disposición de excretas Costa Rica en el año 2019

Con los datos aportados por la ENAHO de julio 2019, y un ajuste con datos del AyA, se presenta en el gráfico 2 que muestra la distribución de la disposición de excretas en Costa Rica, en el año 2019.



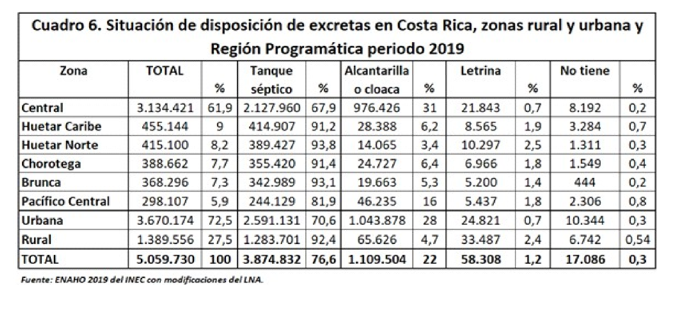
# Escalera de saneamiento en el periodo 2019

Por su parte, el gráfico 3 muestra la Escalera de Saneamiento elaborada con los datos aportados por la ENAHO de julio de 2019 y el LNA.



# Situación de disposición de excretas en Costa Rica según zona rural, urbana y región programática periodo 2019

De conformidad con los datos del ENAHO 2019 y con modificaciones del LNA, se presentan en el cuadro 6 los datos por tipo de mecanismo de disposición de excretas del país, por regiones y en las zonas urbana y rural.



De la participación de los señores Teófilo Monteiro de OMS, y Robert Bain del PCM de

UNICEF/OMS, en la conferencia “LATINOSAN” celebrada a mediados del año 2019 en Costa Rica se determina que un “Servicio de saneamiento gestionado en forma segura” debe contemplar como mínimo tratamiento secundario. En este sentido, el tanque séptico es solamente un tratamiento primario, por lo que no puede formar parte de esa clasificación, y por lo tanto debe clasificarse como un “Servicio básico”.

Considerando lo anterior y según datos aportados por la ENAHO 2019, se define que un total de 3.874.832 habitantes (76,6%) de la población de Costa Rica dispone sus aguas residuales a través de tanque séptico, 1.109. 504 (21,9%) por medio de alcantarillado, 58.308 (1,2%) por letrina y otros, mientras que 17.086 (0,3%) personas no tienen servicio.

No obstante, como aporte y complemento del Laboratorio Nacional de Aguas a la información del INEC, el porcentaje de cobertura con alcantarillado (cloaca) es de 7,9% (399.719 personas) y de 14,0% (708.362 personas) con alcantarillado sanitario, cuya diferencia radica en que el segundo cuenta con tratamiento secundario.

**Esferas de la vida fuera del hogar (2019) (**[**A/HRC/42/47**](http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/42/47)**)**

Los derechos humanos al agua y el saneamiento en esferas de la vida más allá del hogar no son una cuestión exclusiva de grupos específicos de personas, sino que todos podemos ser afectados. La mayoría pasa gran parte del tiempo fuera del hogar, especialmente en espacios de trabajo. Sin embargo, muchas personas en el mundo no comparten la misma comodidad. Por ejemplo, aquellos cuyo espacio de trabajo consiste en campos agrícolas abiertos o calles, como los conductores de rickshaw y los vendedores ambulantes, no pueden depender de los inodoros o puntos de agua porque no hay ninguno a su alrededor. Los espacios públicos, como zonas accesibles para todos, son el salvavidas de numerosas personas y, por lo tanto, deben ser debidamente reconocidos en las políticas de agua y saneamiento de los Estados. Como resultado de un evidente descuido del suministro y la promoción de los servicios de agua y saneamiento en esos lugares, se producen posibles violaciones de los derechos humanos internacionales que afectan de manera desproporcionada a los miembros de los grupos vulnerables y marginados, como las personas sin hogar, los trabajadores y trabajadoras del sector no estructurado en los espacios públicos y las personas privadas de libertad.

Pregunta(s):

1. En el último decenio (2010-2020), ¿qué medidas se han adoptado para incluir el agua y el saneamiento en esferas de la vida más allá del hogar, y en particular en los espacios públicos, en las políticas, planes y estrategias de aplicación nacionales, con miras a garantizar un acceso que se ajuste al contenido normativo de los derechos humanos al agua y el saneamiento y a los principios de los derechos humanos?

R/La Constitución Política de la República de Costa Rica y su ordenamiento jurídico establece, en el Artículo 21, el derecho fundamental a la vida, el cual viene ligado al de la salud, y con ello, el acceso al agua potable deviene como uno de los garantes de esos derechos.

En nuestro país, el agua es un bien de dominio público. La administración del recurso hídrico se encuentra sujeta a un orden de prioridades establecido en el ámbito legal según la Ley de Aguas N.° 276 del 27 de agosto de 1942, y sus reformas, y debe considerar los criterios ambientales establecidos en la Ley Orgánica del Ambiente N°7554 del 04 de octubre de 1995. Así como, en el decreto ejecutivo N°30480-MINAE del 05 de junio del 2002 donde se determinan los Principios que regirán en la Política Nacional en materia de Gestión de los recursos Hídricos, y deberán ser incorporados, en los planes de trabajo de la Instituciones Públicas relevantes.

El día 9 de septiembre del 2016, Costa Rica firma un Pacto Nacional para el cumplimiento de los ODS, incluyendo obviamente el Objetivo 6: “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”. Fijando como una de las metas para el año 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos.

Ley de Aguas N.° 276, del 27 de agosto de 1942 y sus reformas, establece en su artículo 27.I, el uso prioritario del agua para abastecimiento poblacional; este principio es reiterado en el artículo 264 de la Ley General de Salud N.° 5395, del 30 de octubre de 1973 y sus reformas. La citada legislación de salud regula no solo la prioridad en el uso, sino que en sus artículos 266 y 268, se establece la obligatoriedad de que el suministro de agua sea de calidad potable, para evitar afectación a la salud humana. Adicionalmente, la Ley General de Agua Potable N.° 1634, del 14 de setiembre de 1953, y el DE- 38924-S Reglamento para la Calidad del Agua Potable, de 12 de enero de 2015 y su modificación mediante DE-39144-S, establecen normas en cuanto a los sistemas de acueductos y parámetros de calidad que debe cumplir el agua para consumo humano.

Por su parte, en la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, N.° 2726 del 14 de abril de 1961 y sus reformas, se le dio a AyA una competencia a nivel nacional en relación con los servicios públicos de agua potable y alcantarillado sanitario, los cuales pueden ser prestados en forma directa, o bien, a través de la figura de la delegación en asociaciones administradoras de estos sistemas. AyA es una entidad autónoma que ostenta una especialidad orgánica en sistemas de agua potable y saneamiento, siendo a la vez rectora técnica en el tema de agua potable y saneamiento, así como en emisión de normas técnicas para esos sistemas.

En el año 2016 se aprueban y publican 2 Políticas Nacionales con relación al agua y saneamiento, a saber:

**1) Política Nacional de Agua Potable de Costa Rica 2017-2030,** la cual se sostiene bajo 4 Pilares**:**

1-Cultura del Agua

2-Inversión en infraestructura y servicio

3-Gobernabilidad del agua potable

4-Gestión ambiental del agua potable

# 2-)Política Nacional de Saneamiento en Aguas Residuales

El objetivo general de esta Política es lograr, al año 2045, el manejo seguro del total de las aguas residuales generadas en el país. El concepto de Manejo seguro es definido como la garantía de que las aguas residuales no afecten al medio ambiente ni la salud, implementando sistemas de tratamiento individuales o colectivos. Con la ejecución de la Política, la población costarricense tendrá un medio ambiente más seguro, sano y sostenible.

A pesar de lo anterior específicamente en lo que se refiere a **esferas de la vida más allá del hogar, y en particular en los espacios públicos**, según conversación con Zaida Ulate se nos aclara que esto supera el alcance del AyA, ya que se extiende la cobertura del agua y saneamiento a los Habitantes de la calle, a zonas fronterizas, al agua en parques públicos y en Edificaciones Sanitarias, que muchas veces son abastecidas por pozos, siguiendo las propias reglamentaciones del Ministerio de Salud.

A mayor abundamiento y para hacer referencia a lo relativo a política pública, Costa Rica cuenta con dos instrumentos orientadores para la planificación de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable y de saneamiento de aguas residuales, habiendo superado el reto para su oficialización, lo enfrenta en lo relativo a su implementación para que de esta forma, hacer un abordaje integral “más allá del hogar”, a saber:

**I. POLÍTICA NACIONAL DE AGUA POTABLE DE COSTA RICA 2017-2030 (Decreto Ejecutivo N° 41043-S-MINAE)**

El proceso de construcción de la Política Nacional de Agua Potable de Costa Rica “PNAP” fue liderado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), como ente con rectoría técnica del abastecimiento de agua potable y saneamiento de las aguas residuales de Costa Rica; con el apoyo técnico de las siguientes instituciones: Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH S.A.) y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), así mismo se contó con el acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud.

La PNAP contempla cuatro ejes: Inversión en infraestructura y servicio, Gobernabilidad del agua potable, Gestión ambiental del agua potable y Cultura de Agua y para cada uno establece lineamientos que se orientan hacia “esferas de la vida más allá del hogar”, entre ellos:

* Educación y empoderamiento sobre el uso y protección del agua.
* Generación del conocimiento (investigación e intercambio de información sobre el recurso hídrico para abastecimiento de agua potable).
* Inversión en infraestructura resiliente.
* Gestión social y participación ciudadana.
* Planificación y coordinación interinstitucional para el uso y gestión del agua potable.
* Alianzas público-privadas y comunitarios.
* Gestión de cuencas hidrográficas y acuíferos.
* Gestión del riesgo para la reducción de los desastres

**II. POLÍTICA NACIONAL DE SANEAMIENTO DEL LAS AGUAS**

**RESIDUALES (Decreto Ejecutivo N° 40260-S-MINAE)**

El proceso de construcción de la Política Nacional de Saneamiento en Aguas Residuales “PNSAR” se llevó a cabo de forma integrada entre el Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y Ministerio de Hacienda.

Con el apoyo de la Comisión Nacional de Saneamiento (CONASAN) se organizaron talleres participativos con entes operadores como las Municipalidades y las ASADAS a nivel nacional, a la vez se contó con participación de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH S.A.), la Comisión de Agua y Saneamiento del Consejo Nacional de Rectores (CASCONARE) y Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

La implementación de la PNSAR aún cuando no se ha llevado a cabo con la celeridad esperada, por cuanto ha requerido la distribución de las acciones estratégicas en 20 subcomisiones, trasciende el plano de infraestructura de obra pública circunscribiéndolo a un Plan Nacional de Inversiones en Saneamiento 2016-2045 y, de esta forma, incorporando otros actores para lograr productos concretos en materia de:

1. Fortalecimiento Institucional y normativo para el saneamiento de aguas residuales
   1. Roles de las instituciones y reorganización de comisiones técnicas, en materia de saneamiento de aguas residuales.
   2. Legislación ambiental y reglamentación técnica en materia de saneamiento de aguas residuales.
   3. Normalización y reglamentación técnica en materia de disposición y reutilización de las aguas residuales.

1.4Formación y capacitación en tratamiento y gestión de aguas residuales.

1. Gestión integrada para el saneamiento de las aguas residuales
   1. Sistemas de Información para registro de vertido y reúsos de aguas residuales y atención de denuncias.
   2. Protocolos de Vigilancia Estatal aplicado a entes generadores de aguasresiduales y actualización de necesidades en materia de disponibilidad de recursos humanos, informáticos y técnicos.
   3. Modelo de gestión del riesgo en sistemas de tratamiento de aguas residuales.
2. Infraestructura e inversiones en saneamiento

3.1Seguimiento al Plan Nacional de Inversiones en Saneamiento 2016-2045 y establecimiento de la Estrategia de gradualidad para el reemplazo de tanques sépticos.

1. 1.1Sistema Nacional de Información Geográfica para soluciones colectivas en saneamiento, desarrollado e implementado.

3.1.2 Estrategia para el fortalecimiento del Programa SANEBAR, formulada e implementada.

3.2 Lineamientos técnicos de infraestructura de saneamiento en planes reguladores y criterios técnicos para selección de tecnologías de recolección y tratamiento de aguas residuales.

3.3Mejora de procesos y procedimientos vinculados con el trámite y control en la construcción de los sistemas de recolección y tratamiento.

1. Sostenibilidad financiera y modelo tarifario
   1. Constitución de un Fondo Nacional de Saneamiento.
   2. Lineamientos y estructuración de Alianzas Público-Privadas.
   3. Modelo tarifario de recuperación de costos y su aplicación por los operadores.
   4. Decreto Ejecutivo para el cobro de los permisos y servicios.

4.5 Modelo de financiamiento para inversión en saneamiento y asignación de recursos.

1. Participación Ciudadana
   1. Buenas prácticas y manejo adecuado de las aguas residuales.
   2. Promoción de la revalorización y reúso de las aguas residuales de forma segura".
   3. Programa de sensibilización y capacitación a entes generadores de aguas residuales especiales.
   4. Formación técnica y profesional en el manejo y tratamiento de aguas residuales.

Pregunta(s):

1. En el último decenio (2010-2020), ¿qué ejemplos existen en los que se proporcionan a los gobiernos locales directrices y recomendaciones sobre cómo determinar qué espacios públicos requieren la prestación de servicios de agua y saneamiento, y el nivel y tipo de prestación requeridos? ¿Cómo se han aplicado esas directrices y recomendaciones?

R/ El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados está en la obligación de coordinar acciones con las municipalidades, bajo el principio de coordinación interinstitucional ampliamente desarrollado por la Sala Constitucional en varios pronunciamientos.

Así las cosas, la Administración Pública, haciendo uso de las herramientas que se encuentran reguladas en nuestro ordenamiento, ha emitido varias directrices y recomendaciones a los gobiernos municipales para que estos busquen la mejor manera de satisfacer el interés público y las necesidades de las distintas comunidades.

Desde el punto de vista regulatorio y normativo, es importante indicar que el AyA emite recomendaciones y directrices respecto a la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, sin embargo, no es el competente en cuanto a la determinación de que espacios públicos requieren el servicio de agua potable y saneamiento, ni el tipo de prestación o nivel de requerido. Dicha competencia le corresponde a cada gobierno local, junto con otras instituciones como el Ministerio de Salud, INVU, entre otros.

Existen algunos avances en materia de rectoría hacia los Gobiernos locales, de parte de la Presidencia Ejecutiva se han enviado notas para que estos apliquen los planes reguladores con mayor rigurosidad, a fin de evitar las construcciones en lugares sin acceso al agua potable, y que posteriormente se obliga al AyA a brindar el servicio a través de resoluciones de la Sala Constitucional, con afectación en muchos casos del servicio brindado a los usuarios ya existentes.

En el DFOE-DL-IF-09-2016 La Contraloría le solicita al AyA: ***4.28*** *Analizar, conforme el* marco de sus competencias, los resultados expuestos en el presente informe relativos a la calidad del agua potable, la cantidad en el suministro de agua y el estado de la infraestructura a cargo de los acueductos Administrados por las municipalidades de Alvarado, Cartago, Jiménez, La Unión, Oreamuno, Paraíso y Turrialba y el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes; y definir acciones concretas para fortalecer la labor que realiza esa entidad como rector en esta materia y coadyuvar para que tales operadores del servicio garanticen el suministro de agua en condiciones de calidad, cantidad, continuidad y presión suficiente.

Este acompañamiento a las Municipalidades del Valle del Guarco finalizó en el 2018, y se envió respuesta a la Contraloría por medio del PRE-2018-00685 y PRE-2018-00901. También se han tenido que atender órdenes sanitarias para intervenir municipios por aspectos de calidad y continuidad.

En general el problema que se ha detectado es que la mayoría de los Municipios no cuenta con un Plan Regulador Cantonal, y mucho menos que en este se incluya el tema del agua como un elemento de planificación del uso del suelo en el territorio de su jurisdicción. Según el informe del estado de la nación 2019, solo 40 de los 82 cantones cuentan con Plan Regulador Cantonal, de esos 40 solo 21 contemplan toda la superficie del cantón.

**Megaproyectos (2019) (**[**A/74/197**](http://undocs.org/A/74/197)**)**

Los megaproyectos tienen un doble impacto: pueden contribuir a mejorar los medios de vida de las personas, pero también pueden impedir el disfrute de los derechos humanos al agua y el saneamiento. A fin de prevenir y mitigar los riesgos derivados de esos proyectos y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, el Relator Especial presenta un marco del ciclo de los megaproyectos para la realización de los derechos humanos al agua y el saneamiento, que consta de siete etapas, cada una de las cuales tiene repercusiones en el acceso al agua y el saneamiento, en los problemas y los factores facilitadores para la realización de los derechos humanos al agua y el saneamiento. Aclara cada una de las etapas del ciclo del megaproyecto y proporciona una lista de preguntas que constituyen directrices para que los agentes responsables cumplan sus obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos.

Pregunta(s):

1. En el último decenio (2010-2020), ¿qué ejemplos de megaproyectos existen en los que se haya realizado una evaluación del impacto en los derechos humanos, en particular en el agua y el saneamiento, en cada una de las etapas de los megaproyectos\*?

R/ Antes de poder responder la pregunta, es necesario aclarar ciertos aspectos que trae implícitos la misma, empezando por el contenido que debe tener una Evaluación de impacto en los megaproyectos.

Según el documento **El impacto de los megaproyectos en el derecho humano al agua y al saneamiento,** presentado en el Informe del Relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento a la 74a Asamblea General de la ONU. Mr. León Heller, esta evaluación debe hacerse considerando los siguientes aspectos:

# DISPONIBILIDAD

La evaluación del impacto en los derechos humanos en lo referente al agua y el saneamiento debe velar por que el agua que se utiliza para fines humanos y domésticos sea un asunto prioritario y porque, cuando las fuentes de agua se desvíen para satisfacer las necesidades de los megaproyectos, existan soluciones alternativas. Dichas soluciones alternativas deberían cumplir las normas pertinentes de derechos humanos y respetar los valores culturales de las poblaciones afectadas. También se deben poner en práctica medidas para garantizar que las poblaciones desplazadas cuenten con instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento adecuadas.

# ACCESIBILIDAD

La evaluación del impacto en los derechos humanos en lo referente al agua y el saneamiento debe incluir planes y medidas de ejecución encaminados a evitar los efectos en la accesibilidad física a las fuentes de agua o los servicios de saneamiento y, en caso necesario, proporcionar servicios alternativos. Además, deben tenerse en cuenta los efectos en el acceso a servicios de saneamiento debidos a la falta de acceso al agua.

# CALIDAD Y SEGURIDAD

La evaluación del impacto en los derechos humanos, en particular en lo referente al agua y al saneamiento, debería tener en cuenta la manera en que los efluentes liberados por los megaproyectos repercuten en la calidad del agua y la existencia de medidas preventivas encaminadas a evitar la contaminación de los recursos hídricos en primer lugar. Además, las fuentes alternativas ofrecidas como medio de reparación deberían cumplir la norma de calidad para el agua potable.

# ASEQUIBILIDAD

La evaluación del impacto en los derechos humanos en lo referente al agua y el saneamiento debe garantizar que los efectos en la accesibilidad, la disponibilidad y la calidad del agua no conlleven efectos secundarios cuando la fuente alternativa de agua no sea asequible o cuando tampoco lo sean las instalaciones de saneamiento de las zonas reubicadas.

# ACEPTABILIDAD

La evaluación del impacto en los derechos humanos en lo referente al agua y el saneamiento debe velar por que se eviten y se mitiguen efectos secundarios que hagan que la fuente de agua y las instalaciones de saneamiento alternativos no sean aceptables.

# ACCESO A LA INFORMACIÓN

La evaluación del impacto en los derechos humanos en lo referente al agua y el saneamiento debe velar por que la información proporcionada sea relevante, pertinente y oportuna. La información también debe ser accesible con arreglo a los medios de que disponga la población pertinente y presentarse de forma que a esta le resulte comprensible.

# PARTICIPACIÓN

La evaluación del impacto en los derechos humanos en lo referente al agua y el saneamiento debe determinar cuál es la población afectada, que abarca tanto a la población cuyo acceso al agua y el saneamiento se ve directamente afectada como a quienes se ven afectados de manera indirecta. Se debe consultar a la población de buena fe, y el proyecto debe emprenderse únicamente con el consentimiento libre, previo e informado de la población afectada.

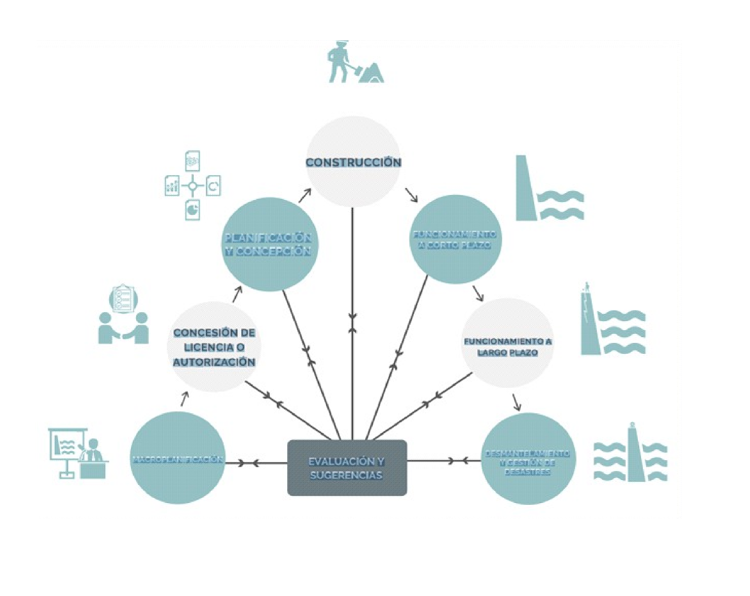
# ACCESO A REPARACIÓN

La evaluación del impacto en los derechos humanos en lo referente al agua y el saneamiento debe valorar si existen garantías suficientes de que las medidas de reparación y desagravio se adoptarán de forma apropiada y oportuna. Deben establecerse marcos adecuados y vinculantes para velar por que se ejecuten las medidas de reparación.

Además, en el previo a la pregunta se indica: “el Relator Especial presenta un marco del ciclo de los megaproyectos para la realización de los derechos humanos al agua y el saneamiento, que consta de siete etapas, cada una de las cuales tiene repercusiones en el acceso al agua y el saneamiento, en los problemas y los factores facilitadores para la realización de los derechos humanos al agua y el saneamiento”.Para poder contestar la pregunta, sea sí o sea no, se debe saber cuáles son esas etapas. Además, que se entiende por Megaproyecto, no necesariamente son megaproyectos que haya realizado el AyA.

“**Las siete etapas de los megaproyectos no se aplican necesariamente a todos los megaproyectos, ni abordan todos y cada uno de los ciclos de un megaproyecto particular. Las primeras dos etapas—la etapa de macroplanificación y la de concesión de licencia o autorización—se refieren a los procedimientos generales que existen en un país, y las etapas posteriores—desde la planificación hasta el desmantelamiento de los megaproyectos—describen las etapas pertinentes a un megaproyecto.**

**Las etapas son:**







En virtud de lo anterior creemos que esta pregunta requiere de un análisis de ejecutivos de las altas esferas de la planificación nacional por lo que no tenemos una respuesta a la misma.

Sin embargo, valga indicar que la Institución cuenta con un instrumento a nivel nacional por medio de SNIP y MIDEPLAN; con una metodología estandarizada en materia de abastecimiento y saneamiento por medio de la cual todas las inversiones se debe analizar los diferentes grupos sociales, sus necesidades, su participación y sus vinculaciones legales; tales por ejemplo como grupos de zonas indígenas. La institución está legalmente llamada a abastecer universalmente a toda la población de Costa Rica. En la evaluación de la factibilidad económica social se garantizan las evaluaciones de los derechos humanos en materia de abastecimiento y saneamiento.

Existen aspectos del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EsIA) del Proyecto PAAM relacionados directamente con la protección de los Derechos Humanos. Se pueden mencionar los siguientes:

* + Una de las conclusiones del EsIA en cuanto al tema de comunicación, es la necesidad de fortalecer la relación con los actores sociales. Existe una demanda creciente de información y participación ciudadana, de ahí que se plantea la constitución de una oficina dedicada tiempo completo a atender la relación proyecto-actores sociales. Esta oficina aspira a erigirse en la referencia fundamental de los ciudadanos en sus consultas sobre el quehacer y avance del proyecto. Debe actuar con un enfoque de atención integral, personalizada y cercana. Es prioritario escuchar a los ciudadanos, y proporcionar soluciones de manera inmediata y satisfactoria. La acogida de esta oficina ha sido bien vista por todos los actores sociales involucrados.
  + En la Evaluación de Impacto Ambiental se proponen diversas medidas para los riesgos identificados en las etapas de Construcción y Operación que tienen relación con aspectos sociales como el acceso al recurso hídrico de comunidades en el área de influencia, dinámica vial, planes de monitoreo participativo en las obras a realizar, entre otros.

En términos generales los proyectos desarrollados por el AyA contemplan el cumplimiento intrínseco del tema de derechos humanos, tal es el caso del derecho humano a la salud, al agua potable y al saneamiento. En los proyectos de construcción se respeta el derecho a la igualdad, a la seguridad, a la no discriminación, a la expresión y libre opinión entre otros.

Dada la división de funciones establecida en la organización, en el momento en que el área de UEN Administración de Proyecto comienza a colaborar en el proyecto ya se cuenta con las etapas iniciales superadas, fases donde se planifica la ejecución. Es en esas etapas donde se valora el alcance del proyecto, la población meta, el enfoque que se le brindará entre otros aspectos, elementos necesarios para valorar la factibilidad del proyecto y su área de influencia. Con la definición del alcance de proyecto y la factibilidad se pasa a una etapa de búsqueda de financiamiento y diseño para posteriormente pasar a la etapa de preejeución y ejecución, ambos procesos administrados por AP.

Con base en lo mencionado en el párrafo anterior, es válido indicar que en la etapa constructiva no se cuenta con la flexibilidad para poder incorporar nuevos elementos no contemplados en las etapas iniciales del proyecto, como lo es la evaluación de impacto en los derechos humanos una vez finalizada la obra o como elemento de decisión en etapas de selección de alguna oferta de alguna empresa en la etapa de p impactos en derechos humanos como condiciones previas para diferentes procesos en la etapa constructiva.

Pregunta(s):

1. En el último decenio (2010-2020), ¿qué ejemplos de megaproyectos existen en los que las obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos de cada parte estén claras en cada una de las etapas de los megaproyectos\*?

R/ Siguiendo con el análisis del documento, existe una Lista de preguntas que sirven como directrices para que los agentes responsables cumplan sus obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos. **EVALUACIÓN Y SUGERENCIAS**

El ciclo incluye una etapa intersectorial, a saber, la evaluación de las distintas fases de un megaproyecto determinado, prestando especial atención a los derechos humanos al agua y el saneamiento. La evaluación constituye un proceso de aprendizaje constructivo que proporciona sugerencias para diversas etapas de megaproyectos posteriores. La evaluación del agua y el saneamiento desde el punto de vista de los derechos humanos incluye un examen de los efectos que tienen los megaproyectos en los derechos humanos al agua y el saneamiento, que abarcan el acceso a la información y a reparación, así como la participación de las personas afectadas.

Pregunta 1: ¿Se ha tenido en cuenta la experiencia adquirida de la evaluación de una etapa para proponer sugerencias en etapas posteriores de los megaproyectos o en nuevos megaproyectos?

La experiencia adquirida de las evaluaciones del impacto en los derechos humanos, en particular en lo referente al agua y el saneamiento, llevadas a cabo en diferentes etapas de uno o varios megaproyectos debería incorporarse en las etapas posteriores del ciclo de vida y en otros megaproyectos nuevos. Este procedimiento garantiza una mejora progresiva de la conceptualización, la ejecución y el funcionamiento de los megaproyectos y también vela por que no se repitan las vulneraciones de los derechos humanos.

# MACROPLANIFICACIÓN

La macroplanificación es la etapa durante la cual se establecen el programa y los planes nacionales de desarrollo, a la vez que se determinan los medios para lograr los objetivos conexos. Esta es la etapa en la que los megaproyectos se definen por primera vez como pilares de la agenda para el desarrollo y se conceptualizan.

Pregunta 2: ¿Incorpora explícitamente la planificación de desarrollo nacional una evaluación del impacto que incluya el derecho humano al agua y el saneamiento?

Los derechos humanos al agua y el saneamiento no solo son pertinentes para los trabajos de planificación nacional en el sector del agua, sino que también deberían tenerse en cuenta en otras planificaciones de desarrollo nacional y en el desarrollo de las infraestructuras en el marco de proyectos que puedan repercutir en la disponibilidad y la calidad del agua, entre otros elementos del contenido normativo de los derechos.

Pregunta 3: ¿Se basa la formulación de planes nacionales de desarrollo en un proceso de consulta?

La consulta con la población puede formar parte de la evaluación del impacto en los derechos humanos o puede ser un proceso independiente. Las opiniones y los problemas de la sociedad civil deberían tenerse en cuenta al adoptar decisiones fundamentales como las relacionadas con los programas de desarrollo, y ningún proyecto de desarrollo debería seguir adelante sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos afectados, a los que se debe consultar de buena fe (Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, art. 32).

Pregunta 4: ¿Respeta el marco legislativo y regulatorio los derechos humanos al agua y el saneamiento que orientan la etapa de macroplanificación?

Las entidades gubernamentales llevan a cabo la función principal de formular las políticas y el programa para el desarrollo. El marco jurídico y normativo que incorpora las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos funciona como guía para la formulación de dicho programa con arreglo a las normas y principios de derechos humanos.

Pregunta 5: ¿Se ha llevado a cabo en la etapa de macroplanificación un estudio comparativo que analice diferentes opciones alternativas a los megaproyectos?

En caso de que existan varias opciones en materia de normas, los Estados partes en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales deben inclinarse por la opción que menos limite los derechos reconocidos en el Pacto (E/C.12/2007/1, párr. 8 d)). Los Estados deben estudiar si hay otras opciones para alcanzar los mismos objetivos. A este respecto, debería llevarse a cabo un cuidadoso estudio comparativo que examine las diversas opciones técnicas y sus efectos en las poblaciones afectadas antes de decidir la ejecución de megaproyectos.

# CONCESIÓN DE LICENCIA O AUTORIZACIÓN

La concesión de licencia o la autorización de un megaproyecto es el proceso por el que las autoridades públicas conceden permiso para la ejecución tras examinar su cumplimiento de las leyes y reglamentos. Las evaluaciones de los efectos ambientales o sociales orientan esos procesos y estudios, y los organismos encargados de conceder autorizaciones son elementos clave para prevenir, minimizar y mitigar los efectos. Independientemente de la formalidad del procedimiento, los procesos de concesión de licencias, autorización o aprobación relativos a los megaproyectos son medidas fundamentales para garantizar su conformidad con los derechos humanos al agua y el saneamiento.

Pregunta 6: ¿Forman los procesos participativos, en particular los que incluyen a la población afectada, parte de la etapa de concesión de licencia o autorización?

Las licencias de los megaproyectos se han concedido generalmente en el momento en que las comunidades tienen conocimiento de ellos y empiezan a movilizarse o a pedir que se les permita participar en el proceso de concesión de licencias. Se debe consultar debidamente a la población afectada, como medida obligatoria, antes de conceder la licencia o la autorización, y, en caso de que esto no se respete, debería existir la posibilidad de anular la autorización sobre la base de una consulta ex post.

Pregunta 7: ¿Es la evaluación de los derechos humanos al agua y el saneamiento una condición previa para la concesión de licencia o autorización?

Los Estados tienen la obligación, antes de conceder la autorización o licencia al proyecto, de evaluar con precisión el posible impacto que podría tener un megaproyecto en los derechos humanos al agua y el saneamiento. Cuando las violaciones de los derechos humanos relacionadas con la contaminación del agua y la extracción excesiva resulten de la acción del Estado, puede que los Estados estén incumpliendo su obligación de respetar los derechos humanos (A/HRC/27/55, párr. 20).

Pregunta 8: ¿Se revalúa o renueva la licencia periódicamente?

Los megaproyectos reciben la autorización para seguir adelante con sus actividades durante un período de tiempo específico, y a menudo no existen mecanismos de supervisión para vigilar si el proyecto sigue cumpliendo los requisitos que se establecieron en el momento en que se otorgó la licencia o autorización. Una licencia, aun después de concedida, debe revaluarse periódicamente, en particular cuando se introducen modificaciones sustantivas en un megaproyecto o cuando sus repercusiones en el medio ambiente y los derechos humanos de las comunidades afectadas han cambiado de forma imprevista.

# CONCESIÓN DE LICENCIA O AUTORIZACIÓN PLANIFICACIÓN Y CONCEPCIÓN

El ciclo de vida efectivo de un megaproyecto específico comienza en la etapa de la planificación y concepción, en la que se determinan los aspectos prácticos y técnicos del proyecto. Esta etapa, que también se denomina planificación previa a la construcción, tiene en cuenta las especificaciones del proyecto y entraña la elección de estrategias, medios, métodos y recursos para la ejecución del proyecto, así como la elección de la ubicación del lugar de operación y construcción.

Pregunta 9: ¿Se ha efectuado una evaluación del impacto ex ante, basada en los derechos humanos, incluidos los derechos humanos al agua y el saneamiento, en la etapa de planificación?

Tanto el Estado como las empresas privadas que participan en megaproyectos tienen la responsabilidad de incorporar y aplicar una evaluación del impacto ex ante basada en los derechos humanos en la etapa de planificación del megaproyecto. Las empresas, en el cumplimiento de su diligencia debida en materia de derechos humanos, deben evaluar el impacto real y potencial de sus actividades sobre los derechos humanos, integrar las conclusiones y actuar al respecto, hacer un seguimiento de las respuestas y comunicar la forma en que se hace frente a las consecuencias negativas detectadas (Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, principio 17).

Pregunta 10: ¿Se incluyen medidas preventivas y de mitigación en la etapa de planificación?

El impacto constante de los megaproyectos genera daños ambientales que, por su naturaleza y características, no pueden remediarse, son difíciles de mitigar y pueden persistir durante varias generaciones. De ello se desprende que, cuando no se tiene debidamente en cuenta, la reparación del daño causado requiere tiempo y recursos y que tales daños a veces son irreparables a corto o a medio plazo, lo que supone un proceso traumático para la población afectada. Deberían establecerse planes de contingencia para los desastres causados por los megaproyectos o los desastres ocasionados por el desmoronamiento de tales proyectos en la etapa de planificación.

Pregunta 11: ¿Se han establecido procesos de adopción de decisiones participativos, en los que se incluya a la población afectada, en las primeras fases de la etapa de planificación y concepción?

La población afectada debe participar en la adopción de decisiones, desde las primeras fases de la etapa de planificación y concepción. Los principales interesados deben contar con las herramientas necesarias para evaluar adecuadamente las posibles repercusiones de los megaproyectos en los derechos humanos al agua y el saneamiento. Por consiguiente, se debe proporcionar a ambas partes tiempo y recursos suficientes y acceso transparente a la información y a las interacciones entre los planificadores de los megaproyectos y las partes interesadas, incluida la sociedad civil, a fin de que decidan, planifiquen y adopten opciones adecuadas y eficaces, y en particular para que los agentes responsables protejan, promuevan y hagan efectivos los derechos humanos al agua y el saneamiento.

Pregunta 12: ¿Se han establecido medidas específicas para las comunidades que se verán desplazadas como consecuencia del megaproyecto? ¿Se basan dichas medidas en el marco de los derechos humanos?

Los megaproyectos a menudo conllevan el desplazamiento de poblaciones, a quienes se obliga trasladarse a nuevos lugares, donde es preciso que haya servicios de agua disponibles para el consumo, los usos domésticos, la producción de alimentos, la agricultura o la ganadería, así como instalaciones de saneamiento. Cuando el desplazamiento sea inevitable, deben elaborar planes para proporcionar agua potable antes y después de los desalojos. Todas las medidas de reasentamiento, tales como el suministro de agua y saneamiento, deben ser coherentes con los principios de derechos humanos y finalizar antes de que se traslade a las personas afectadas de sus lugares de residencia.

# CONSTRUCCIÓN

La construcción es la etapa en que las medidas adoptadas por los agentes responsables tienen efectos directos sobre la población y su acceso al agua y el saneamiento.

Pregunta 13: ¿Están claras las obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos que incumben a los agentes en la etapa de construcción?

La implementación adecuada de la rendición de cuentas entraña definir claramente quién es responsable, quién puede exigir cuentas a los agentes y qué agentes deben responder de sus acciones. Comprender claramente quién tiene obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos en la etapa de construcción resulta crucial para determinar quién es, además, responsable a la hora de ofrecer explicaciones y justificaciones y a quién se impondrán las sanciones y medidas correctivas por cualesquiera violaciones y abusos (A/73/162, párr. 90). Particularmente en la etapa de construcción, la participación del sector privado es compleja, dado que los megaproyectos entrañan una gama de conocimientos técnicos y la cadena de suministro, que incluye a diferentes contratistas y subcontratistas, además de la entidad empresarial principal encargada de la construcción.

Pregunta 14: ¿Se han adoptado medidas para dar respuesta a los conflictos sociales?

Durante la fase de construcción, es posible que se produzcan conflictos sociales, en la medida en que las comunidades afectadas vean amenazados su agua potable, sus alimentos, sus entornos de vida o su propiedad de la tierra. En esos conflictos, como se indica en la sección anterior, a menudo se acosa y se amenaza a los defensores de los derechos humanos y a los líderes comunitarios. Los Estados, las empresas y los inversionistas tienen obligaciones y responsabilidades de adoptar medidas concretas para reducir la escalada de los conflictos, y de hacer frente a los problemas que afectan a los defensores de los derechos humanos, como, entre otros, las causas profundas subyacentes de dichos conflictos, relacionadas con el desequilibrio de poder, la mercantilización y la corrupción.

# FUNCIONAMIENTO A CORTO PLAZO

La etapa de funcionamiento comienza cuando la infraestructura de un megaproyecto comienza a utilizarse para cumplir su propósito. Los conflictos existentes en la fase de construcción puede exacerbarse y es posible que surjan otros, si el funcionamiento se desvía de su plan o de los términos y condiciones convenidos o si surgen consecuencias imprevistas.

Pregunta 15: ¿Están claras las obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos que incumben a los agentes en la etapa de funcionamiento a corto plazo?

Aclarar quiénes son los agentes responsables que intervienen en la etapa de funcionamiento a corto plazo es fundamental para un proceso transparente de rendición de cuentas, al igual que aclarar los agentes involucrados en la etapa de construcción, ya que los agentes de las dos etapas no siempre son los mismos.

Pregunta 16: ¿Se ha llevado a cabo una evaluación de los efectos en los derechos humanos, en particular en lo referente al agua y el saneamiento, en la etapa de funcionamiento a corto plazo?

En el funcionamiento a corto plazo pueden producirse efectos negativos y errores en la planificación y la concepción de los megaproyectos. Por ejemplo, la contaminación puede aumentar progresivamente a medida el megaproyecto se pone en marcha. En este período, algunos tipos de megaproyectos, como los proyectos de minería o industriales, pueden comenzar a liberar desechos generados por sus actividades en los cuerpos de agua y contaminarlos.

# FUNCIONAMIENTO A LARGO PLAZO

Es preciso tener muy en cuenta el funcionamiento a largo plazo de los megaproyectos, ya que el entorno bioeconómico y socioeconómico es de carácter dinámico, puede producirse el deterioro de la infraestructura, y la explotación prolongada de los recursos tal vez exacerbe los efectos u ocasione efectos nuevos e imprevistos.

Pregunta 17: ¿Están claras las obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos que incumben a los agentes en la etapa de funcionamiento a largo plazo?

En algunos proyectos, el operador a largo plazo puede ser diferente de la entidad que construyó y puso en marcha el proyecto a corto plazo. También puede darse el caso de que los cambios en los agentes participantes tal vez no resulten evidentes y que, por lo tanto, las funciones y las responsabilidades de los agentes responsables en esta etapa deben quedar claras a la población afectada.

Pregunta 18: ¿Se ha llevado a cabo una evaluación de los efectos en los derechos humanos, en particular en lo referente al agua y el saneamiento, en la etapa de funcionamiento a largo plazo?

Es preciso determinar los posibles efectos y riesgos de los megaproyectos en el funcionamiento a largo plazo y establecer salvaguardias para proteger los derechos humanos al agua y el saneamiento. La complejidad y la duración del ciclo de vida de los megaproyectos exigen que se dé respuesta a los efectos a largo plazo y se contemplen los efectos que persistirán durante varias generaciones. La participación activa de las comunidades afectadas en la supervisión de la seguridad, el desempeño y las repercusiones del megaproyecto resulta fundamental.

Pregunta 19: ¿Se presenta adecuadamente la información a la población afectada en la etapa de funcionamiento a largo plazo?

La responsabilidad de responder por las acciones es la obligación de los agentes de dar explicaciones y justificación razonada de sus acciones, su inacción y sus decisiones a las personas afectadas por estas, así como al público en general (A/73/162). Sin embargo, en muchos casos, las poblaciones afectadas no han sido debidamente informadas o consultadas en las fases de preparación y ejecución de los megaproyectos o en los procesos de reparación para compensar el daño causado por un megaproyecto.

# DESMANTELAMIENTO Y GESTIÓN DE DESASTRES

La etapa final del ciclo de vida guarda implica diversos procesos, entre ellos el desmantelamiento o el cierre del megaproyecto según un procedimiento formal establecido que incluye procesos tanto administrativos como técnicos. En caso de desastre, el megaproyecto también puede llegar al final de su ciclo si sus estructuras físicas quedan destruidas parcialmente o en su totalidad. Los desastres pueden ser antropogénicos, como los provocados por causas tecnológicas, o deberse a causas naturales, como inundaciones, terremotos y tsunamis. Normalmente se considera que los desastres son antropogénicos, ya se producen por actividades tecnológicas o por causas naturales que podrían evitarse mediante la gestión de los megaproyectos.

Pregunta 20: ¿Forma parte la etapa de desmantelamiento de la planificación del proyecto?

La falta de reglamentación que exija que el megaproyecto incluya una etapa de desmantelamiento como parte de un proceso de planificación obligatorio es la razón de que al final del ciclo falten procedimientos adecuados o de que los procedimientos sean inadecuados. Una forma de prevenir y mitigar las consecuencias derivadas del incumplimiento relacionado con el desmantelamiento es establecer en la etapa de planificación planes para finalizar las actividades de funcionamiento y desinstalar la infraestructura física.

Pregunta 21: ¿Se ha llevado a cabo una evaluación del impacto en los derechos humanos, en particular en lo referente al agua y el saneamiento, en la etapa de desmantelamiento?

La evaluación del impacto en los derechos humanos en lo referente al agua y el saneamiento no solo incluye los efectos negativos que podría tener la eliminación de la infraestructura y los restos de la operación en la calidad del agua, sino también la forma en que determinadas partes de la infraestructura pueden utilizarse para mejorar el acceso al agua para la población que vive en las inmediaciones. Un plan de esmantelamiento también puede incluir no solo la eliminación de la infraestructura, sino también una forma de cesión de parte de las instalaciones a las comunidades locales, de conformidad con una evaluación de las necesidades en la que estas participen.

Pregunta 22: ¿Se han implantado medidas preventivas y procedimientos de indemnización, reparación y desagravio en caso de producirse un desastre que afecte al disfrute de los derechos humanos al agua y el saneamiento?

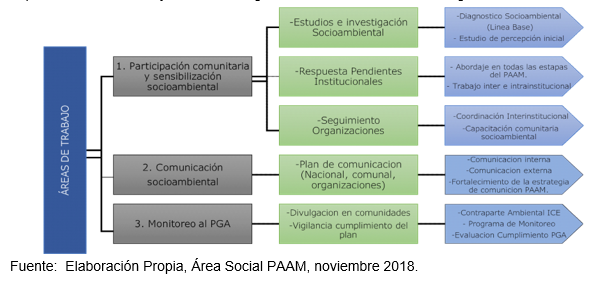
Las medidas preventivas y de no repetición son esenciales para evitar que se vuelvan a producir los desastres, y los Estados deben evaluar los posibles riesgos y daños que puedan producirse en caso de desastre. Las medidas preventivas incluyen medidas para evitar o reducir la probabilidad de efectos adversos. Los Estados están obligados a contar con planes para responder a posibles situaciones de emergencia. Incluso durante una emergencia se aplican las obligaciones inmediatas de acceso a un nivel mínimo esencial de agua y saneamiento sin discriminación alguna (A/HRC/39/55, párr. 14). La indemnización y la reparación, especialmente en lo que respecta a las situaciones de desastre, deben proporcionarse de forma apropiada y oportuna, en estrecha consulta con las comunidades afectadas. Aportar una explicación clara y transparente de las razones por las que tuvo lugar el desastre constituye el primer paso para lograr una reparación y compensación adecuadas por los daños causados a las comunidades afectadas.

En virtud de lo anterior consideramos que para dar respuesta a esta pregunta se requiere de un mayor análisis y conocimiento sobre la planificación de los macroproyectos a nivel nacional y poder asegurar que las obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos de cada parte estén claras en cada una de las etapas de estos.

Es importante indicar que el departamento de Gestión Ambiental de AyA, señala que en relación al Proyecto Abastecimiento del Acueducto Metropolitano, dentro de su Estrategia de Comunicación ha formulado el objetivo de informar a las comunidades del Área de Influencia Directa del Proyecto, sobre las respectivas medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación establecidas en el Plan de Gestión Ambiental ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), y la necesidad de la participación de los grupos de interés en el monitoreo hacia su cumplimiento, en favor de la viabilidad socioambiental del PAAM. Asimismo. Se debe elaborar un sistema de indicadores que enfocando aspectos cualitativos y cuantitativos permitan medir el impacto de la Estrategia.

La Estrategia de comunicación en su ejecución deberá sensibilizar a los grupos de interés sobre la importancia y beneficios del Proyecto, mediante mecanismos de comunicación y participación pública para construir una percepción positiva y gestionar la viabilidad socioambiental del proyecto. Se deberán identificar los temas estratégicos, conflictivos y críticos para atención inmediata, establecer tácticas de comunicación diferenciadoras para cada público con el fin de mantener el dialogo, oportuno y trasparente y elaborar un protocolo de responsabilidad socio ambiental para el seguimiento de las medidas de control ambiental en las diferentes fases (factibilidad, construcción y operación).

Partiendo de los objetivos y resultados esperados, se plantea el diagrama a continuación el cual expone la línea de trabajo de la Estrategia Socioambiental del PAAM según áreas definidas:



Esta propuesta busca un cambio importante en cuanto la forma en que se han trabajado los proyectos institucionales. Ya que conlleva un trabajo conjunto entre la comunidad y AyA desde la fase de Evaluación de Impacto Socioambiental. Además, esto puede favorecer la percepción que tienen la población respecto a la Institución, ya que busca que las y los ciudadanos se sientan parte del proceso, brindando sentido de pertenencia y compromiso.

Por último, en abastecimiento se pueden citar: programas que han sido conceptualizados como megaproyectos para la atención de las necesidades de abastecimiento de la población de Costa Rica, actualmente solo se ejecutan dos megaproyectos que impactaran a la población nacional y a los indicadores de AyA.

* + RANC-E. Programa de reducción de agua no contabilizada y ahorro energético
  + PAAM. Programa de abastecimiento del acueducto metropolitano, quinta ampliación.

Ambos proyectos se encuentran en una fase de diseño.

Es factible indicar que en todos los proyectos desarrollados por UEN AP (Administración de Proyectos), se tiene clara la responsabilidad de brindar agua potable a la población en calidad, cantidad y continuidad acorde a las políticas de la institución, las cuales cumplen con el principio del derecho al agua.

Pregunta(s):

1. En el último decenio (2010-2020), ¿qué ejemplos de megaproyectos existen en los que la evaluación de impacto en los derechos humanos al agua y el saneamiento sea una condición previa para la concesión de una licencia/aprobación?

R/Como referencia, de megaproyectos con las condiciones anteriores se citan los programas:

* + BCIE 1725
  + BCIE 2164
  + BCIE 2188
  + PAAM Programa de abastecimiento del acueducto metropolitano, quinta ampliación.

En el caso del Proyecto Abastecimiento del Acueducto Metropolitano, la Evaluación de Impacto Socioambiental se encuentra regulada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). En sus resoluciones públicas la SETENA, en relación con los derechos humanos de acceso al agua afirma los siguientes criterios:

* + El servicio de abastecimiento de agua para consumo humano y el resguardo del recurso hídrico para consumo humano, son un prioridad para la Secretaría. Desde 1992 con la Declaración de Dublín, se reconoce el agua dulce, como un recurso finito y vulnerable que se caracteriza por ser esencial para sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente.
  + La Jurisprudencia del país protege el agua en varios sentidos, por ejemplo “…la Sala Constitucional reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara en otros numerosos del Derecho Internacional Humanitario”.
  + En nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ("Protocolo de San Salvador" de 1988), el cual dispone:

"Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos..." (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto N° 2003-4654 de las quince horas cuarenta y cuatro minutos del veintisiete de mayo de dos mil tres).

* + También la SETENA se encuentra tutelada por el artículo 50 de la Constitución Política que establece que "...toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado... El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho". Actualmente se encuentra en trámite en la Asamblea Legislativa la reforma al artículo 50 de la Constitución Política para reconocer expresamente en este el derecho humano de acceso al agua.

En resguardo de ese derecho, la normativa de Evaluación de Impacto se ha regido en el país en materia de Derecho Ambiental, con principios tales como el *indubio pro natura* o precautorio, según consta en el inciso 2) del artículo 11 de la Ley de Biodiversidad N° 7788, que señala "...Criterio precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección...", mismo que se ajusta al principio 15 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992.

Además del análisis anterior, resulta importante también indicar que la Dirección de Planificación de AyA, en relación a la presente consulta, señala que tiene relación con las preguntas 7 y 14:

Pregunta 7: ¿Es la evaluación de los derechos humanos al agua y el saneamiento una condición previa para la concesión de licencia o autorización?

Los Estados tienen la obligación, antes de conceder la autorización o licencia al proyecto, de evaluar con precisión el posible impacto que podría tener un megaproyecto en los derechos humanos al agua y el saneamiento. Cuando las violaciones de los derechos humanos relacionadas con la contaminación del agua y la extracción excesiva resulten de la acción del Estado, puede que los Estados estén incumpliendo su obligación de respetar los derechos humanos (A/HRC/27/55, párr. 20).

Pregunta 14: ¿Qué ejemplos de megaproyectos existen en los que se haya realizado una evaluación del impacto en los derechos humanos, en particular en el agua y el saneamiento, en cada una de las etapas de los megaproyectos?

En virtud de lo anterior consideramos que para dar respuesta a esta pregunta se requiere de un mayor análisis y conocimiento sobre los macroproyectos que se estén formulando o construyendo en el país.

Pregunta(s):

1. En el último decenio (2010-2020), ¿qué ejemplos de megaproyectos existen en los que se hayan previsto medidas preventivas y procedimientos de indemnización, reparación y compensación en caso de un desastre que afecte al disfrute de los derechos humanos al agua y el saneamiento?

\*Las etapas de los megaproyectos incluyen:

* Macroplanificación: Los megaproyectos se identifican primero como pilares de la agenda de desarrollo, y se conceptualizan.
* Licencia y aprobación: El proceso mediante el cual las autoridades públicas conceden la autorización para su aplicación después de haber examinado su cumplimiento de las leyes y reglamentos.
* Planeando y diseñando: En esta etapa se tienen en cuenta las especificaciones del proyecto y se seleccionan las estrategias, los medios, los métodos y los recursos para la ejecución, así como la identificación del lugar de operación y construcción del sitio.
* Construcción: La etapa en la que las medidas adoptadas por los agentes responsables tienen un efecto directo en la población y en su acceso al agua y el saneamiento
* Operación a corto plazo: La etapa de explotación comienza cuando la infraestructura de un megaproyecto comienza a utilizarse para cumplir su propósito.
* Operación a largo plazo: A largo plazo, el entorno bio-socioeconómico es dinámico, puede producirse el deterioro de la infraestructura y la explotación prolongada de los recursos puede exacerbar o introducir impactos nuevos e imprevistos.
* Desmantelamiento y desactivación: La última etapa está asociada a varios procesos, incluyendo el desmantelamiento, o el cierre del megaproyecto. Además, en caso de desastres, el megaproyecto también puede llegar a un final de su ciclo en el que sus estructuras físicas son destruidas total o parcialmente.

R/ En el Plan de Gestión Ambiental (PGA) del PAAM se establecen las siguientes acciones de responsabilidad:

* 1. *Programa de Monitoreo Ambiental (PMA)*: el mismo contiene los elementos operativos establecidos para hacer el seguimiento (control) del estado de ejecución de cada medida correctora, evaluar la efectividad de estas en términos del objetivo ambiental propuesto y debido al resultado de esa evaluación, definir las acciones correctivas que sea necesario realizar -cuando proceda- para alcanzar el objetivo socioambiental establecido.
  2. Compensar a la población que sufra de alguna alteración de sus fuentes de agua como consecuencia de las excavaciones subterráneas.
  3. Acompañamiento y orientación técnica para una adecuada valoración, análisis y gestión del recurso hídrico local. Elaborar un Protocolo para atención de comunidades con el objetivo de una adecuada Gestión del recurso hídrico.
  4. Establecer un protocolo de atención de daños a las actividades económicas.
  5. Programa de gestión y seguridad del abastecimiento de agua potable en comunidades del Área de Influencia Directa (AID).

Se toman medidas preventivas a la hora de la construcción del proyecto, como es el análisis de riesgo a desastres y en caso de darse, medidas de mitigación (estamos en proceso).

El tema de valoración de riesgos es relativamente nuevo en la institución, normalmente predomina el análisis de riesgos técnicos o generados por desastres naturales. En general, se podría decir que la aplicación de la gestión de riesgos a través de SEVRI (*Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional*) ha permitido generar ciertas medidas de prevención y mitigación ante la ejecución de los diferentes proyectos elaborados por esta UEN.